

# **CRÓNICA DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO: SALA TERCERA<sup>1</sup>**

## **INTRODUCCIÓN**

Esta *crónica* tiene por objeto recoger una selección de las resoluciones dictadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo a lo largo del año judicial 2023-2024 en las materias incluidas dentro de su ámbito de competencia.

El presente año judicial 2023-2024 ha discurrido en los mismos términos que en ediciones anteriores desde el punto de vista de la composición de la Sala y sus diferentes secciones, al haberse agudizado aún más el problema sobre el que ya se llamó la atención en crónicas pasadas, de la falta de provisión de las numerosas vacantes existentes derivada de la imposibilidad legal de efectuar los correspondientes nombramientos mientras no se produzca la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

La situación así generada no ha implicado, sin embargo, una disminución de su relevancia, como se pone de manifiesto con el examen de las resoluciones judiciales de las que se da cuenta a continuación, bien expresivas de la trascendencia de los problemas interpretativos del Derecho que han sido jurisprudencialmente esclarecidos en este periodo, contribuyendo así a proporcionar certeza y seguridad jurídica al ordenamiento jurídico-público, administrativo y tributario.

La selección de jurisprudencia que se expone a continuación no es más que una muestra que carece de pretensión de exhaustividad, pero que resulta útil para resaltar algunas de las resoluciones de más calado dictadas en el periodo considerado y hacer visible el intenso trabajo desarrollado por los Magistrados y Magistradas de esta Sala.

---

<sup>1</sup> La elaboración de la crónica de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha sido realizada por Carlos Romero Rey, Letrado Coordinador del Gabinete Técnico, junto con los letrados del Gabinete Christian Hidalgo Nieto, Guillermo Ruiz Arnaiz, Ana Isabel Sequeros Monzón, Víctor Escartín Escudé y Pedro Moreno Brenes; todo ello bajo la dirección y supervisión del Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, presidente (e.f.) de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

## **INDICE**

### **I.- ADMINISTRATIVO**

#### **1.- ACTO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO**

1.1.- Cuando se articulan pretensiones de reconocimiento de funciones de superior categoría y reclamación de abono de diferencias retributivas entre el puesto en propiedad y aquél cuyas funciones se desempeñan efectivamente el pleito es de cuantía indeterminada.

1.2.- Los actos administrativos consentidos solo podrán ser removidos mediante revisión de oficio. En su caso, los efectos de la nulidad serán desde la resolución sin perjuicio de la prescripción de las obligaciones de la Hacienda Pública.

1.3.- Introducción de cambios esenciales en la elaboración de un reglamento. Trámite de audiencia.

1.4.- El transcurso de tiempo prolongado entre el acto administrativo y la solicitud de revisión de oficio no es por sí sólo motivo suficiente para impedir la revisión de oficio de actos nulos, pero sí en atención a las circunstancias del caso concreto.

1.5.- Obligación del instructor de un procedimiento sancionador de comunicar a los interesados la práctica de la prueba testifical a los efectos de que puedan estar presentes e intervenir en ella formulando las preguntas que tengan por conveniente.

1.6.- Limitación temporal de la revisión de oficio si la eliminación del acto es contraria a la buena fe o la equidad, por el excesivo tiempo transcurrido y la confianza creada en el tráfico jurídico o en terceros.

1.7.- Excepción del interés general como límite a la caducidad de procedimientos iniciados de oficio.

#### **2.- BIENES PÚBLICOS**

2.1.- Bienes comunales. Acotamiento para la implantación de proyecto de desarrollo de energía renovables

### **3.- FUNCIÓN PÚBLICA**

3.1.- Anulación de base de convocatoria de proceso selectivo, derecho a reconocimiento a ser incluido en la lista de aprobados aplicando la note de corte fijada inicialmente en virtud del principio de igualdad.

3.2.- El funcionario denunciado respecto al que se ha incoado una información previa o reservada, aunque luego no fuere sancionado, tiene derecho a acceder a dicho expediente.

3.3.- Proceso selectivo. Delegación valoración aspirantes. Terceros de buena fe.

3.4.- Momento en que debe cumplirse el requisito relativo al porcentaje de discapacidad para participar en un proceso selectivo por el turno de discapacitados.

3.5.- Función Pública. Antigüedad. Valoración. Servicios prestados por personal interino no puede ser objeto de valoración diferente que los prestados por funcionarios de carrera.

3.6.- La situación administrativa correspondiente a los Registradores de la Propiedad que son nombrados Magistrados del Tribunal Supremo es la de excedencia voluntaria por incompatibilidad.

3.7.- Los miembros de la carrera judicial con la categoría de Juez no pueden percibir el sueldo de Magistrado, como retribución básica, cuando prestan servicios en plazas de órgano judicial adscritos a la categoría de Magistrado.

3.8.- En aquellos procesos selectivos cuyas bases exijan la individualización de la nota de cada miembro del tribunal resulta necesario conservar el documento acreditativo o su incorporación al acta para el adecuado control de la discrecionalidad técnica

3.9.- Prioridad temporal en la presentación de la solicitud como criterio de desempate en la oferta de empleo de funcionarios interinos.

3.10.- Función pública: la utilización objetivamente abusiva por la Administración de la interinidad no da automáticamente derecho a indemnización

3.11.- En aquellos procesos selectivos cuyas bases exijan la individualización de la nota de cada miembro del tribunal resulta necesario conservar el documento acreditativo o su incorporación al acta para el adecuado control de la discrecionalidad técnica

3.12.- Los miembros de la carrera judicial con la categoría de Juez no pueden percibir el sueldo de Magistrado, como retribución básica, cuando prestan servicios en plazas de órgano judicial adscritos a la categoría de Magistrado.

3.13.- Cuando la pretensión verse sobre el reconocimiento de un derecho funcional, el pleito se tendrá como de cuantía indeterminada al margen de la cuantificación de los trienios.

3.14.- Solicitud de compatibilidad que se mantiene pese a que se ha cambiado de destino y no se comunica a la Administración. Carga del funcionario de comunicar tal cambio de destino.

3.15.- Solicitud de permanencia en el servicio activo tras alcanzar la edad de jubilación de Secretario general del ayuntamiento. Silencio administrativo positivo, en las solicitudes de prolongación del servicio activo

3.16.- Funcionario que desempeña funciones correspondientes a varios puestos de trabajo en orden a sus retribuciones complementarias, no resulta de aplicación la limitación prevista en el art. 7.1 de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades.

3.17.- El reconocimiento en sentencia firme que las patologías determinantes de la jubilación por incapacidad permanente son consecuencia directa del servicio vincula al gestor de Clases Pasivas para el reconocimiento de la pensión extraordinaria de jubilación.

3.18.- A efectos del reconocimiento de la carrera profesional del personal estatutario fijo o temporal los servicios prestados pueden haberse realizado en el mismo servicio de salud o en cualquier otro dentro del Sistema Nacional de Salud.

3.19.- El reconocimiento en sentencia firme que las patologías determinantes de la jubilación por incapacidad permanente son consecuencia directa del servicio vincula al gestor de Clases Pasivas para el reconocimiento de la pensión extraordinaria de jubilación,

3.20.- Función Pública. Cese de puesto de libre designación. Efectos.

3.21.- Cuando la pretensión verse sobre el reconocimiento de un derecho funcional, el pleito se tendrá como de cuantía indeterminada al margen de la cuantificación de los trienios.

3.22.- Cómputo del tiempo de vacaciones como "servicio efectivo".

3.23.- Carrera horizontal. Cómputo de servicios prestados como personal laboral, cuando adquiere la condición de personal funcionario. Importe como personal laboral.

3.24.- Trienios. Derecho a que los trienios reconocidos como personal laboral sean abonados, tras adquirir la condición de personal funcionario, en la cuantía correspondiente al momento en que fueron perfeccionados.

3.25.- Relación de Letrados de los servicios jurídicos con sus respectivas Administraciones.

3.26.- Cómputo de los servicios previos en la Administración del personal laboral fijo discontinuo: debe comprender todo el tiempo de la relación laboral, incluidos los intervalos sin llamadas.

3.27.- Si la nulidad de una disposición general (las Directrices de Ordenación y Clasificación de los Puestos de Trabajo) implica, de modo necesario, la declaración de nulidad de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por acuerdo de la Administración.

3.28.- La nota de corte que debe aplicarse cuando se anula la declaración de "no apto" en una prueba de un proceso selectivo y se ordena que el interesado se someta a las pruebas de un proceso posterior es la correspondiente a esta última.

3.29.- Abogado Fiscal que desempeña las mismas funciones que los Fiscales de su localidad: no tiene derecho a las diferencias retributivas con respecto a estos últimos. Véase la STS n.º 1648/2023.

3.30.- Un miembro de la carrera judicial con la categoría de Juez no puede percibir el salario base de Magistrado, como retribución básica, cuando sirve plaza de órgano judicial adscrita a la categoría de Magistrado.

#### **4.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**

4.1.- Contratación pública. Empresas que reciben fondos públicos. Situación ventajosa incompatible con el principio de libre concurrencia en contratación pública.

4.2.- Contrato. Inclusión de cláusula, para repercutir el IBI sobre el arrendatario o cualquier otro tributo municipal donde radique la vivienda arrendada

4.3.- Contratación. Compensación por modificación unilateral de una concesión por la administración local: indemnización automática por aumento de coste o disminución de ingresos (art. 127.2 del reglamento de servicios de las corporaciones locales) o atendiendo al principio de equilibrio económico de la globalidad del contrato.

4.4.- Contratación. Legitimación de un integrante de una unión temporal de empresas (UTE) para actuar individualmente en defensa de sus derechos para impugnar actuaciones administrativas adoptadas en la adjudicación de un contrato administrativo.

4.5.- Modificación de revisión de precios en la liquidación del contrato después del certificado final de obra

4.6.- Subsanación de documentación aportada en procedimiento de contratación

4.7.- Contratos de obra. Tipo de interés aplicable a la mora de la Administración en el pago de certificaciones de obra.

## **5. CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO (ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA)**

5.1.- Legitimación activa de Colegios Profesionales para la impugnación de pliegos de contratación.

5.2.- Derecho sancionador. Abogados. Defensa de la competencia. Principio non bis in idem.

5.3.- Registradores propiedad. Informatización de los Registros. Función pública registral. Publicidad y legalidad registral. Firma electrónica certificada.

## **6.- DERECHO DE LOS SECTORES REGULADOS Y DERECHO DE LA COMPETENCIA**

### **6.1.- SECTOR ENERGÉTICO**

6.1.1. - Necesidad de acudir por parte del Ministerio a los cauces fijados en el ordenamiento para modificar la retribución base pese a la propuesta de la CNMC de revisión de aquella.

6.1.2.- Falta de legitimación activa de asociación para impugnar el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la planificación de la red de transporte de energía eléctrica Horizonte 2026. Mera defensa de la legalidad.

6.1.3. Modelo retributivo de la actividad de distribución de la energía eléctrica. Recálculo del coeficiente lambda base por la reconsideración de subvenciones.

6.1.4. Eficiencia energética. Condiciones para el ejercicio de facultades de comprobación por parte de la CNMC sin necesidad de previa inspección in situ de la instalación de cogeneración

6.1.5.- Energía eléctrica. Red de distribución.

6.1.6. Efectos del doble silencio administrativo en las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica. Servicio público

6.1.7. Cancelación de aval por cancelación de la inscripción en el Registro de Preasignación de retribución para instalaciones fotovoltaicas. Prescripción. Plazos. Dies a quo.

6.1.8. Determinación del hecho de que la evaluación ambiental del art.19.1 de la Ley 21/2013 se refiere al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía y no a cada uno de los proyectos encuadrados en el mismo considerados individualmente.

6.1.9. Energía eléctrica. Nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica y renovaciones. Compatibilidad. Silencio administrativo.

## **6.2.- TELECOMUNICACIONES Y SECTOR AUDIOVISUAL**

6.2.1.- Posibilidad de que las asociaciones sin ánimo de lucro presten servicios audiovisuales de carácter comercial y presentarse a concursos para adjudicación de licencias de estas características.

6.2.2. - Convocatoria de concurso público para el otorgamiento de licencias de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora disponibles en la comunidad autónoma de Castilla y León.

6.2.3. Cuantía de la compensación económica del art. 19.4 de la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual por el acceso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónica a los estadios y recintos para retransmitir acontecimientos deportivos.

## **6.3.- TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS.**

6.3.1.-. Derecho a la información. Servicios Funerarios. Límites al derecho a la información. Afectación a los intereses económicos.

6.3.2.- Derecho al olvido. Derecho de supresión respecto de datos personales correspondientes a una persona fallecida. Inexactitud parcial de la información.

6.3.3.- Aplicación a las autoridades portuarias de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Datos referidos a organigrama, plantilla y funcionarios.



6.3.4.- Aplicación de la Ley 19/2023 ante solicitud de acceso a información pública a una Administración para aportarla en procedimiento judicial.

6.3.5. Protección de datos. Utilización por la AEAT de datos de carácter personal de terceras personas físicas distintas al obligado tributario.

6.3.6. Concesión de estatuto de persona denunciante a funcionario por denuncia de hechos presuntamente delictivos.

## **6.4.- MERCADOS FINANCIEROS**

6.4.1.-. Impugnación de liquidación del saldo de compensación. Convenio AGE-Autopistas Concesionaria Española, S.A.

6.4.2.- Sanción por infracción de la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Cuantía de la multa, principio de proporcionalidad y aplicación retroactiva de la normativa posterior más favorable.

6.4.3.- Afectación, a efectos de caducidad, a todos los sujetos incurso en un procedimiento sancionador tramitado contra una entidad crediticia y sus directivos por la suspensión por razón de petición de informe preceptivo al Banco de España (art.273 TRLMV).

6.4.4.- Consideración de la previsión contenida en el art. 529 TRLSC como regla general que exige a las entidades de interés público disponer de una comisión de auditoría propia.

## **6.5.- TRANSPORTE**

6.5.1. - VTC. Compatibilidad de la regla de proporcionalidad 1 VTC/Taxis con el TFUE. Reformatio in peius.

6.5.2. - VTC. Espera de 30 minutos. Restricciones a las autorizaciones de vehículos con conductor. Libertad de empresa.

6.5.3. Investigación accidente ferroviario. Independencia, imparcialidad y objetividad de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

6.5.4 Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Enriquecimiento injusto.

6.5.6.- Adjudicación directa de contrato de servicio público en supuesto excepcional de interrupción del servicio o riesgo inminente de interrupción: imposición del requisito de previa renuncia del concesionario prestatario del servicio.

## **6.6. - DERECHO PUBLICO DE LA COMPETENCIA**

6.6.1. —. Defensa de la competencia. Autoridad administrativa competente para la instrucción y resolución de procedimientos sancionadores: incidencia de la existencia de procedimientos masivos para verificar los efectos supraautonómicos de prácticas restrictivas.

6.6.2.-. Potestad sancionadora en materia de defensa de consumidores y usuarios en sectores regulados. Competencia estatal y competencia autonómica.

6.6.3. Defensa de los consumidores. Telefonía móvil. Publicidad engañosa. Legitimación.

6.6.4. Determinación de si la delimitación exacta del mercado relevante es o no un elemento del tipo de la infracción tipificada en los artículos 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

6.6.5. Efectos que la distinción entre mercado relevante y mercado afectado puede tener en la delimitación del elemento esencial del tipo de la infracción tipificada en el art. 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del TFUE.

6.6.6.- Cuota de entrada y fondo de regulación de ascensos y descensos de la liga ACB. Mercado relevante.

## **7.- DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS**

7.1.- Motivación de las sentencias. Inactividad de la Administración. Interrupción del plazo de prescripción por acción emprendida por una entidad asociativa. Principio buena administración.

7.2.- Derechos fundamentales. Denegación de medida cautelar. Pérdida de objeto al haber recaído sentencia en el pleito principal.

7.3.- Autorización de entrada en domicilio familiar con menores de edad para el desalojo y aplicación del principio de proporcionalidad. Voto particular.

7.4.- Derechos fundamentales contrapuestos: derecho de reunión versus derecho a la intimidad (art. 20 y 18 de la CE).

## **8.- EXPROPIACIÓN FORZOSA**

8.1.- Órgano municipal competente para iniciar acciones judiciales en materia de expropiación forzosa.

## **9.- EXTRANJERÍA Y ASILO**

### **9.1.- EXTRANJERÍA**

9.1.1.- Situación de estancia irregular en España. Sanción de multa o expulsión. Juicio de ponderación y circunstancias de agravación.

### **9.2. - ASILO**

9.2.1.- Asilo. Protección internacional y justicia cautelar. Incidencia de la sentencia del TJUE (Gran Sala) de 19 de junio de 2018 (asunto C-181/16, Caso Gnandi).

## **10.- PODER JUDICIAL. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.**

10.1.- Legitimación para pretender en el proceso judicial la imposición de sanciones al juez o magistrado denunciado.

10.2.- Medidas de refuerzo y apoyo. Legalidad de la comisión de servicio cuya renovación se instó por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia con la anuencia del comisionado, y podía ser renovada sin necesidad de ofrecerla en concurso público.

10.3.-No procede reconocer indemnización por las comisiones de servicios que tengan lugar por iniciativa propia.

10.4.- La actividad como titulares de la potestad jurisdiccional de jueces y magistrados, se debe diferenciar de su condición de empleados públicos sujetos a un estatuto profesional, que sí está comprendido en la actividad inspectora y disciplinaria del CGPJ.

10.5.- Proceso selectivo para la provisión de plazas entre juristas de reconocida competencia. Si la recurrente entendía que algunos miembros del tribunal ejercieron una actividad de preparación que incurría en la incompatibilidad, debió recusarles nada más conocer tal circunstancia.

10.6.- Los servicios especiales en la carrera judicial han de ser objeto de interpretación y aplicación estricta. No resulta admisible declarar a una persona en situación de servicios especiales en dos o más Cuerpos o Carreras simultáneamente.

10.7.-La falta de aptitud e idoneidad a que se refiere el artículo 201.5.d) de la LOPJ puede ser enjuiciada con independencia del desempeño anterior de su labor sin antecedente o nota desfavorable alguna.

10.8.- - Cabe reconocer las retribuciones y alta en seguridad social de jueces sustitutos tras cesar en su nombramiento y llamamiento, pero solo si se trata de supuestos excepcionales.

10.9.- Llamamiento de los magistrados suplentes. Ni la LOPJ ni el reglamento establece pautas cerradas para la delimitación del sistema a establecer.

10.10.- Las denominaciones oficiales de la Comunidad Autónoma y de su capital son las establecidas en el Estatuto de Autonomía. Deben usarse tanto en las resoluciones judiciales cuanto en el soporte en el que constan recogidas, así como en las certificaciones que de ellas se expidan y su soporte.

10.11.- Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales unipersonales y a los Presidentes de Sala o de Sección de los Tribunales colegiados, la potestad de fijar los criterios generales conforme a los que han de realizarse los señalamientos.

10.12.- Transparencia en el CGPJ y protección de datos personales. No es accesible a terceros los datos relativos a la salud de una magistrada.

## **11.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL**

11.1.- Responsabilidad patrimonial del Estado legislador al amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 182/2021, de 26 de octubre, en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

11.2.- Responsabilidad patrimonial por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19

## **12. – SANIDAD**

12.1. Sanidad. Conservación de las células madre del cordón umbilical. Obligación de suscribir un convenio o acuerdo de colaboración entre el Servicio extremeño de salud y una entidad privada para conservar la sangre del cordón umbilical para su eventual uso.

12.2.- Seguridad Social. Anulación de alta en el RETA de un trabajador del sistema especial de empleados de hogar. TGSS: Revisión de oficio en supuestos de constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones.

## **13.- SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS. ACCIÓN DE FOMENTO**

13.1. Principios de objetividad y transparencia recogidos en el artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

13.2. Reintegro. Incumplimiento con la actualidad de pagos y obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

13.3. Inembargabilidad parcial subvenciones. Expedientes de regulación temporal de empleo o trabajadores autónomos en situación de emergencia social.

13.4. Subvenciones en el área de acogida e integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, del estatuto de apátrida y de personas acogidas al régimen de protección temporal. Competencia.

13.5. Subvenciones. Intereses de demora. Dies a quo.

13.6. Concreción fecha inicio del cómputo de la prescripción. Interrupción del plazo de prescripción por acción emprendida por una entidad asociativa.

13.7. Empresas que reciben fondos públicos. Situación ventajosa incompatible con el principio de libre concurrencia en contratación pública.

## **14.- URBANISMO Y VIVIENDA, Y MEDIO AMBIENTE**

### **14.1. - URBANISMO**

14.1.1.- Urbanismo. Evaluación ambiental estratégica y efectos de la nulidad de los instrumentos de planificación.

14.1.2.- Urbanismo. Iniciativa particular en el planeamiento urbanístico y protección del patrimonio histórico.

14.1.3.- Urbanismo. Situación legal de fuera de ordenación y las situaciones asimiladas. Caducidad del ejercicio de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística

### **14.2.- MEDIO AMBIENTE**

14.2.1.- Parques eólicos. Procedimiento de evaluación de impacto ambiental Informes sectoriales y trámite de información pública.

14.2.2.- Ordenanza para la restricción de la circulación de determinados vehículos en la ciudad de Barcelona.

14.2.3.- Dominio público marítimo-terrestre. Zona de influencia. Ordenación urbanística y régimen transitorio.

14.2.4.- Dominio público marítimo-terrestre. Licencia urbanística y competencias autonómicas para reposición de legalidad.

14.2.5.- Dominio público hidráulico y aguas procedentes de la desalación. Impugnación del RD 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba, entre otros, el plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Segura.

14.2.6.- Modificación del Reglamento General de Costas. Nulidad de pleno derecho. Trámite de consulta pública.

## **II.- TRIBUTARIO**

### **1.- PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS**

1.1.- Procedimiento iniciado mediante declaración. Caducidad del procedimiento. Necesidad de declararla expresamente antes de iniciar un nuevo procedimiento de inspección por el mismo concepto. Efectos.

1.2.- Procedimiento de comprobación de valores. Informe de valoración interno o externo. Determinación del *dies a quo* del plazo máximo del procedimiento.

1.3.- Procedimiento de inspección. Posibilidad de requerir la comparecencia personal del representante orgánico de la obligada tributaria que es persona jurídica. Efectos de incumplimiento

1.4.- Recaudación. Limitación de los ayuntamientos para dictar diligencias de embargo de dinero en cuentas abiertas en sucursales de entidades financieras radicadas fuera de su término municipal

1.5.- Responsabilidad tributaria solidaria. Prescripción de la acción para exigir la obligación de pago a los responsables. Cómputo y falta de virtualidad interruptiva del plazo de prescripción por actuaciones frente al deudor principal

1.6.- Procedimiento sancionador. Operatividad de la prohibición del *bis in idem* en casos de anulación de sanción derivada de la previa anulación, por motivos formales, de la liquidación de la que trae causa.

## **2.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS**

2.1.- Presentación electrónica obligatoria de la autoliquidación del IRPF. Improcedencia por establecerse de forma indiscriminada

2.2.- Deducción por maternidad. Aplicación del incremento. Interpretación de la expresión “guarderías o centros de educación infantil autorizados”

2.3.- Base imponible. Improcedencia del cómputo de pérdidas patrimoniales debidas a transmisiones lucrativas

2.4.- Derechos de imagen de deportistas profesionales. Tributación en el IRPF.

## **3.- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES**

3.1.- Determinación de los gastos generales de administración que pueden imputarse a un establecimiento permanente situado en un país tercero.

3.2.- Imputación temporal de cantidades devueltas por ingresos indebidos derivados de un tributo declarado no conforme con el Derecho de la Unión Europea.

3.3.- Gastos deducibles. Retribuciones a los administradores sociales. Casos.

## **4.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO**

4.1.- Investigación básica. Derecho a la deducción de las cuotas del IVA soportadas por adquisiciones de bienes y servicios afectos a la actividad de investigación básica realizada por una Universidad

4.2.- Cesión gratuita de un vehículo afecto a la actividad empresarial a los empleados para uso particular. No sujeción.

4.3.- Subvenciones recibidas por sociedades que prestan servicios de radiodifusión pública. No inclusión en la base imponible

## **5.- IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES**

5.1.- Donación por ambos cónyuges de participaciones en empresa familiar. Requisito de la edad. Interpretación del art. 20.6 de la Ley del ISD

5.2.- Supuesto de transmisión del *ius delationis*. Cómputo del plazo de prescripción para liquidar el impuesto.

## **6.- IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS**



6.1.- Formalización en un único documento notarial de la división en propiedad horizontal y extinción de condominio preexistente. Forma de tributar en AJD

## **7.- IMPUESTOS LOCALES**

7.1.- IIVTNU. Interpretación de la noción de “situaciones consolidadas” prevista en la STC 182/2021. La fecha a considerar es la del dictado de la sentencia, no la de su publicación en el BOE

7.2.- IIVTNU. Posibilidad de revisar las liquidaciones firmes, al amparo del artículo 217.1.g) LGT, como consecuencia de la STC 59/2017. Revisión de la doctrina jurisprudencial previa

7.3.- IBI. Exención del artículo 62.1.a) TRLHL. Aplicabilidad al derecho de superficie respecto de inmuebles destinados a la educación

## **8.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTRAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS**

8.1.- Prestaciones sanitarias por COVID-19. Liquidación a aseguradora de precios públicos por gastos de asistencia sanitaria a beneficiarios de MUFACE por el servicio público de salud

8.2.- Prestaciones patrimoniales públicas no tributarias. Obligatoriedad de la consulta previa en la elaboración de ordenanzas locales. Excepciones.

## **III.- CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO**

1.1.- Determinación de la aplicación de la rehabilitación del plazo prevista en el art. 128 LJCA al trámite de audiencia concedido en una pieza de medidas cautelares. Indefensión.

1.2.- Acuerdo corporativo para recurrir adoptado por Administrador único de una sociedad de responsabilidad limitada. Inadmisibilidad apreciada en apelación. Trámite de subsanación.

1.3.- Imposibilidad de introducir hechos nuevos en apelación por la vía del art. 33.2 de la LJ.

1.4. No procede la extensión de efectos cuando está pendiente un recurso de casación sobre el mismo tema de fondo. El art. 110.6 de la LJCA debe interpretarse de conformidad con la actual regulación del recurso de casación.

1.5.- Extensión de efectos de sentencia, se hace preciso que la cuestión decidida no sea objeto de enjuiciamiento y posterior decisión por el Tribunal Supremo al conocer de un recurso de casación interpuesto contra otra sentencia con idéntica cuestión.

1.6.- Falta de jurisdicción de la contencioso-administrativa para enjuiciar sobre reclamación de cuotas de Comunidad de Regantes. Competencia de la jurisdicción civil.

1.7.- En materia de incidentes de ejecución de sentencias, no podrá resolverse directamente sobre la forma correcta de ejecución sin plantear un incidente contradictorio del artículo 105.2 LJCA ante las manifestaciones sobre una supuesta imposibilidad material de ejecución realizadas por la Administración.

## **I.- ADMINISTRATIVO**

### **1.- ACTO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO**

**1.1.- Cuando se articulan pretensiones de reconocimiento de funciones de superior categoría y reclamación de abono de diferencias retributivas entre el puesto en propiedad y aquél cuyas funciones se desempeñan efectivamente el pleito es de cuantía indeterminada.**

La STS, 4ª, 27-09-23, ECLI:ES:TS:2023:3750, RC 7338/2021, determina que cuando se articulan pretensiones de reconocimiento de funciones de superior categoría y reclamación de abono de diferencias retributivas entre el puesto en propiedad y aquél cuyas funciones se desempeñan efectivamente el pleito es de cuantía indeterminada.

**1.2.- Los actos administrativos consentidos solo podrán ser removidos mediante revisión de oficio. En su caso, los efectos de la nulidad serán desde la resolución sin perjuicio de la prescripción de las obligaciones de la Hacienda Pública.**

La STS, 4ª, 5-10-24, ECLI:ES:TS:2023:3969, RC 690/2021 considera, por una parte que los actos administrativos consentidos, por no haber sido objeto de recurso en el plazo establecido y cuya nulidad de pleno Derecho se afirme, solamente podrán ser removidos mediante el procedimiento de revisión de oficio previsto por el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y, por otra parte que, en el caso, los efectos de la declaración de nulidad han de operar desde el momento en que se dictó la resolución que la padece, sin perjuicio de los límites establecidos por la Ley en materia de prescripción de las obligaciones de la Hacienda Pública y de los sentados por el apartado 4 de la disposición derogatoria de la Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 1/2012, de 21 de febrero, de medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales.

**1.3.- Introducción de cambios esenciales en la elaboración de un reglamento. Trámite de audiencia.**

La STS, 3ª, 16-10-23, RC 848/2022, ECLI:ES:TS:2023:4287, determina que cuando se introducen cambios sustanciales que afectan a los aspectos nucleares de lo proyectado cede la regla general que determina que no es exigible reiniciar una y otra vez los trámites de audiencia, información o recabar informes a medida que en ese proceso de elaboración se va cambiando el proyecto que se gesta debiéndose conceder nuevo trámite de audiencia resultando, en ausencia de este, viciado de nulidad el procedimiento de elaboración de la norma.

**1.4.- El transcurso de tiempo prolongado entre el acto administrativo y la solicitud de revisión de oficio no es por sí sólo motivo suficiente para impedir la revisión de oficio de actos nulos, pero sí en atención a las circunstancias del caso concreto**

La STS, 4ª, 21-11-2023, RC 7189/2021, ECLI:ES:TS:2023:5141 razona que el artículo 110 de la Ley 39/2015 permite que puedan ser atemperados los efectos de la revisión de oficio de los actos nulos, manteniendo estos, cuando por el tiempo transcurrido el ejercicio de la revisión pueda ser contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. La seguridad jurídica que propugna el artículo 9.3 de la Constitución requiere, en circunstancias determinadas, entender aplicable la salvedad que el legislador, antes en el artículo 102 de la Ley 30/1992 y ahora en el artículo 110 de la Ley 39/2015, ha previsto como límite a la revisión de oficio de actos nulos por el tiempo transcurrido.

**1.5.- Obligación del instructor de un procedimiento sancionador de comunicar a los interesados la práctica de la prueba testifical a los efectos de que puedan estar presentes e intervenir en ella formulando las preguntas que tengan por conveniente**

La STS, 29-11-23, RC 8445/2021, ECLI:ES:TS:2023:5147 considera que en supuestos como el de autos, del artículo 78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se deduce la obligación para el instructor de comunicar a los interesados los datos referidos a la práctica de la prueba testifical a los efectos de que puedan estar presentes en su práctica e intervenir en ella.

**1.6.- Limitación temporal de la revisión de oficio si la eliminación del acto es contraria a la buena fe o la equidad, por el excesivo tiempo transcurrido y la confianza creada en el tráfico jurídico o en terceros.**

La STS, 4ª, 6-03-24, RC 8492/2022, ECLI:ES:TS:2024:1184 concluye que, en el marco de un procedimiento administrativo de ingreso a la función pública, en el que la Administración acordó la revisión de oficio, declaró la nulidad de una base de la convocatoria y la retroacción de actuaciones para una nueva valoración de aspirantes, la solicitud de revisión de oficio de la nueva resolución final del proceso de ingreso estará, en todo caso, sujeta a los límites del artículo 110 de la Ley 39/2015, aplicables en este caso por razón del tiempo transcurrido y de la pasividad del recurrente.

### **1.7.- Excepción del interés general como límite a la caducidad de procedimientos iniciados de oficio.**

Ahondando en los argumentos utilizados en dos pronunciamientos precedentes - sentencias de 26 de abril de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:2834) y de 27 de marzo de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:2965)-, la relevante sentencia de 14 de marzo de 2024 (rec. 5572/2022, ECLI:ES:TS:2024:1576) fija una interesante doctrina jurisprudencial sobre el régimen de la caducidad en los procedimientos de revisión de oficio y su exclusión.

Así, las cuestiones sobre las que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en: a) Reafirmar, complementar, matizar y, en su caso, rectificar o corregir la doctrina de esta Sala en cuanto a si la excepción de interés general prevista en el artículo 92.4 de la Ley 30/1992 (actual artículo 95.4 de la Ley 39/2015), respecto a la aplicabilidad de la caducidad, únicamente se podrá aducir en procedimientos iniciados a solicitud del interesado o gozará del mismo alcance en aquellos procedimientos que se inicien de oficio, y, b) Determinar si dicha excepción resultará igualmente aplicable al procedimiento de revisión de oficio de disposiciones y actos nulos, dadas las especialidades de éste.

Como respuesta a la cuestión casacional, la Sala fija como doctrina jurisprudencial en interpretación del actual artículo 95.4 de la Ley 39/2015 que la posibilidad de excluir la caducidad de los procedimientos administrativos por interés general o conveniencia rige tanto si se han iniciado por el interesado o por la Administración, *siendo aplicable dicha exclusión a los procedimientos de revisión de oficio de disposiciones y actos nulos de pleno derecho.*

## **2.- BIENES PÚBLICOS**

### **2.1.- Bienes comunales. Acotamiento para la implantación de proyecto de desarrollo de energía renovables**

En la relevante sentencia de 28 de febrero de 2024 (rec. 5546/2022, ECLI:ES:TS:2024:1016) se plantea ante el TS la cuestión de determinar si es posible acotar y adjudicar a un tercero, que carezca de la condición de vecino, parte de bien comunal mediante precio, para fin específico relacionado con la implantación de proyecto de desarrollo de energía renovables.

La Sala, en respuesta a la cuestión de interés casacional planteada, concluye que el art. 106 RBEL debe interpretarse en el sentido de que *el acotamiento es un instrumento que permite una utilización de parte del bien comunal para un fin de interés social distinto del tradicional siempre que repercuta en beneficio de los vecinos, titulares de su aprovechamiento, y no impida u obstaculice hasta hacerlo impracticable el uso tradicional del bien que, en la medida en que lo exija el cumplimiento de la concreta finalidad social elegida o la legislación sectorial que le resulte de aplicación, puede requerir una modalidad de uso o aprovechamiento del bien comunal distinta de la que se siga para su uso conforme a su destino tradicional, pero que debe respetar el orden de prelación establecido en los arts. 75 TRLRL y 94 RBEL, de forma que puede acudir a la adjudicación en subasta mediante precio a un tercero, respetando*

*la preferencia de los vecinos en igualdad de condiciones, cuando no sea posible dar cumplimiento al fin legítimo decidido mediante las modalidades de aprovechamiento que le preceden.*

### **3.- FUNCIÓN PÚBLICA**

#### **3.1.- Anulación de base de convocatoria de proceso selectivo, derecho a reconocimiento a ser incluido en la lista de aprobados aplicando la note de corte fijada inicialmente en virtud del principio de igualdad.**

La STS, 4ª, 13-9-23, RC 5645/2021, ECLI:ES:TS:2023:3656, , concluye que la revisión de oficio, que pueda emprender la Administración de las bases por la que se rige un proceso selectivo ya realizado y de sus actos de aplicación, no puede conducir a resultados contrarios al principio de seguridad jurídica. La nota de corte a aplicar a quienes se encuentren en las circunstancias de la recurrente es la inicialmente fijada.

#### **3.2.- El funcionario denunciado respecto al que se ha incoado una información previa o reservada, aunque luego no fuere sancionado, tiene derecho a acceder a dicho expediente.**

La STS, 4ª, 25-09-23, RC 8072/2020, ECLI:ES:TS:2023:3748, concluye que el funcionario denunciado respecto al que se ha incoado una información previa o reservada, aunque luego no fuere sancionado, tiene derecho a acceder a dicho expediente.

#### **3.3.- Proceso selectivo. Delegación valoración aspirantes. Terceros de buena fe.**

La STS, 3ª, 4-10-23, RC 5352/2021, ECLI:ES:TS:2023:4133, determina la imposibilidad de que un tribunal calificador delegue la valoración de los aspirantes en un proceso selectivo, sin que proceda la modificación de la jurisprudencia sobre los terceros de buena fe que obtuvieron plaza en procesos selectivos en los que, por sentencia firme, se dispone la retroacción de las actuaciones a fin de que se sigan para los recurrentes a favor de los que falla las fases del proceso selectivo afectadas de los vicios determinantes de la estimación de sus pretensiones.

#### **3.4.- Momento en que debe cumplirse el requisito relativo al porcentaje de discapacidad para participar en un proceso selectivo por el turno de discapacitados.**

La STS, 4ª, 3-11-23, RC 5386/2021, ECLI:ES:TS:2023:4578 que el momento en que debe cumplirse la condición relativa al porcentaje de discapacidad para participar en un proceso selectivo por el turno de discapacitados es el establecido en las bases de la convocatoria correspondiente. Lo que no es obstáculo, sin

embargo, para que quien ha participado en un proceso selectivo por el turno de discapacitados, ha aprobado todas las pruebas y solo en un momento posterior deja de tener el porcentaje de discapacidad requerido por las bases de la convocatoria pueda ser tenido por aprobado en el turno general; algo que dependerá de que haya obtenido mejor puntuación que alguno de los aprobados en dicho turno general, o que en este hayan quedado plazas sin cubrir.

### **3.5.- Función Pública. Antigüedad. Valoración. Servicios prestados por personal interino no puede ser objeto de valoración diferente que los prestados por funcionarios de carrera.**

La STS, 4ª, 22-11-2023, RC 3006/2022, ECLI:ES:TS:2023:4950 determina que el mérito de antigüedad contemplado en el artículo 48.1.a) del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, en referencia al tiempo de servicios prestados por personal interino, no puede ser objeto de valoración diferente que el trabajo desarrollado por funcionarios de carrera, ya sea obviando el desarrollado por aquellos, ya sea confiriendo al mismo menor puntuación, siempre y cuando se refiera a los mismos puestos de trabajo mediante la realización de las mismas o asimiladas funciones. La solución contraria a la expuesta supondría incurrir en el trato discriminatorio que proscribe la cláusula 4 de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

### **3.6.- La situación administrativa correspondiente a los Registradores de la Propiedad que son nombrados Magistrados del Tribunal Supremo es la de excedencia voluntaria por incompatibilidad.**

La STS, 4ª, 27-11-23, RC 6701/2022, ECLI:ES:TS:2023:4947 la sentencia considera que A la vista de la regulación expuesta de la regulación funcional sobre la concesión de "servicios especiales", de la regulación del cuerpo de destino del recurrente, Magistrado del Tribunal Supremo, y de la del cuerpo de procedencia, Registrador de la Propiedad, no cabe entender los conceptos "cargo público", artículo 552 Reglamento Hipotecario y "órgano constitucional", artículo 87. 1h) Estatuto Básico del Empleado Público, en el sentido pretendido por el recurrente para ser declarado en la situación administrativa de servicios especiales. Concluyendo que la situación administrativa correspondiente a los Registradores de la Propiedad que son nombrados Magistrados del Tribunal Supremo es la de excedencia voluntaria por incompatibilidad.

### **3.7.- Los miembros de la carrera judicial con la categoría de Juez no pueden percibir el sueldo de Magistrado, como retribución básica, cuando prestan**

**servicios en plazas de órgano judicial adscritos a la categoría de Magistrado.**

La STS, 4ª, 14-12-23, RC 53/2022 fija como doctrina casacional que un miembro de la carrera judicial con la categoría de Juez no puede percibir el sueldo de Magistrado, como retribución básica, cuando sirve plaza de órgano judicial adscrita a la categoría de Magistrado.

**3.8.- En aquellos procesos selectivos cuyas bases exijan la individualización de la nota de cada miembro del tribunal resulta necesario conservar el documento acreditativo o su incorporación al acta para el adecuado control de la discrecionalidad técnica**

La STS, 4ª, 18-12-23, RC 8217/2021, ECLI:ES:TS:2023:5723 recuerda que, cuando se trata de órganos colegiados como aquí sucede, no es posible ni necesaria una motivación por parte de cada uno de sus componentes, bastando la voluntad conjunta del órgano.

**3.9.- Prioridad temporal en la presentación de la solicitud como criterio de desempate en la oferta de empleo de funcionarios interinos.**

La STS, 4ª, 21-12-23, RC 4579/2022, ECLI:ES:TS:2023:5774, consiente que el servicio de empleo, en su labor de intermediación puede servirse como criterio de desempate de la prioridad en la presentación de solicitudes para una determinada oferta procedente de las Administraciones Públicas siempre que a la igualdad que lo hace necesario se haya llegado mediante la aplicación de criterios coherentes con los principios de igualdad, mérito y capacidad.

**3.10.- Función pública: la utilización objetivamente abusiva por la Administración de la interinidad no da automáticamente derecho a indemnización**

La STS, 4ª, 20-12-23, RC 4553/2021, ECLI:ES:TS:2023:5710, determina que el hecho de que haya habido una situación objetivamente abusiva no implica, automáticamente, que el personal estatutario interino que sea cesado haya sufrido un daño efectivo e identificado, sin que quepa por tanto, reconocer un derecho a indemnización por esa sola circunstancia. Si bien, sí cabrá reclamar por aquellos daños materiales o morales, por una disminución patrimonial o una pérdida de oportunidad que el empleado público interino no tuviera el deber jurídico de soportar para lo que este deberá presentar una reclamación por daños efectivos e identificados con arreglo a las normas generales en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración y acreditar tales daños.

**3.11.- En aquellos procesos selectivos cuyas bases exijan la individualización de la nota de cada miembro del tribunal resulta necesario**



**conservar el documento acreditativo o su incorporación al acta para el adecuado control de la discrecionalidad técnica**

La STS, 4ª, 18-12-23, ECLI:ES:TS:2023:5723 concreta que, aunque el tribunal calificador pudiera no haber conservado las plantillas individualizadas de cada miembro que reflejasen la puntuación asignada y su justificación, al menos debe haber incorporado esa información al acta final del proceso selectivo lo que no hizo al limitarse a indicar la puntuación.

**3.12.- Los miembros de la carrera judicial con la categoría de Juez no pueden percibir el sueldo de Magistrado, como retribución básica, cuando prestan servicios en plazas de órgano judicial adscritos a la categoría de Magistrado.**

La STS, 4ª, 14-12-23, RC 53/2022, ECLI:ES:TS:2023:5417 concluye que no cabe hablar de situación de desigualdad entre los Jueces que sirven órganos judiciales adscritos a la categoría de Magistrado y quienes en régimen de sustitución o suplencia sean nombrados como Magistrado para desempeñar órganos judiciales adscritos a la categoría de Magistrado, por lo que, en ambos casos, el sistema legal dispone que perciban el sueldo correspondiente a su categoría.

**3.13.- Cuando la pretensión verse sobre el reconocimiento de un derecho funcional, el pleito se tendrá como de cuantía indeterminada al margen de la cuantificación de los trienios.**

La STS, 4ª, 13-12-23, RC 6626/2021, ECLI:ES:TS:2023:5413: el pleito será de cuantía determinada o determinable a efectos de apelación si lo litigioso se ciñe al cálculo de los trienios (periodos, cuantificación, actualización y devengo de intereses); ahora bien, si se litigase por el presupuesto, esto es, por el reconocimiento del derecho a percibirlos en la cuantía consolidada como contratado laboral, la pretensión económica -la cuantía de lo reclamado y su cálculo- se supeditaría al reconocimiento previo de un derecho, luego se trataría de un pleito de cuantía indeterminada a efectos de apelación.

**3.14.- Solicitud de compatibilidad que se mantiene pese a que se ha cambiado de destino y no se comunica a la Administración. Carga del funcionario de comunicar tal cambio de destino.**

La STS, 4ª, 13-12-24, RC 4150/2020, ECLI:ES:TS:2023:5412 declara que, efectos del artículo 93.1 de la LJCA, si un funcionario cambia de puesto de trabajo principal estando en trámite la solicitud para autorizar compatibilizarlo con una segunda actividad, caben dos posibilidades: o retira la solicitud para instarla de nuevo ya desde el nuevo destino, o bien comunica a la Administración el cambio de destino para que decida sobre la compatibilidad valorando ese nuevo puesto principal. De no hacerlo, la solicitud decaerá y podrá instarla de nuevo; y si fuese otorgada la compatibilidad sin haberse valorado el cambio de la actividad

principal, quedará sin efecto ya por razón del artículo 14, párrafo tercero de la Ley 53/1984.

**3.15.- Solicitud de permanencia en el servicio activo tras alcanzar la edad de jubilación de Secretario general del ayuntamiento. Silencio administrativo positivo, en las solicitudes de prolongación del servicio activo**

La STS, 4ª, 5-12-23, RC 6441/2021, ECLI:ES:TS:2023:5536 determina la no aplicación al caso del art. 2.k) del Real Decreto 1777/1995, al tratarse de una disposición reglamentaria que no pudo tener en cuenta este supuesto, porque es anterior a la introducción en nuestro ordenamiento de la posibilidad de que los funcionarios públicos permanezcan en el servicio activo tras alcanzar la edad de jubilación. Además, el mismo texto legal que introdujo esta posibilidad previó que la falta de respuesta negativa motivada al menos con quince días de antelación tiene eficacia estimatoria de la solicitud de prolongación en el servicio activo (disposición final 7ª de la Ley 13/1996); lo que es, sin duda alguna señal de que el silencio administrativo tiene sentido positivo.

**3.16.- Funcionario que desempeña funciones correspondientes a varios puestos de trabajo en orden a sus retribuciones complementarias, no resulta de aplicación la limitación prevista en el art. 7.1 de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades.**

La STS, 4ª, 11-01-24, RC 8358/2021, ECLI:ES:TS:2024:94, determina la inaplicación al caso de autos de la limitación prevista en el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, al no ser un supuesto de incompatibilidad.

**3.17.- El reconocimiento en sentencia firme que las patologías determinantes de la jubilación por incapacidad permanente son consecuencia directa del servicio vincula al gestor de Clases Pasivas para el reconocimiento de la pensión extraordinaria de jubilación.**

La STS, 4ª, 18-01-24, RC 8570/2021, ECLI:ES:TS:2024:162, concluye que el reconocimiento en sentencia firme de que las patologías determinantes de la jubilación por incapacidad permanente son consecuencia directa del servicio vincula al órgano gestor de Clases Pasivas a efectos del reconocimiento de la pensión extraordinaria de jubilación.

**3.18.- A efectos del reconocimiento de la carrera profesional del personal estatutario fijo o temporal los servicios prestados pueden haberse realizado en el mismo servicio de salud o en cualquier otro dentro del Sistema Nacional de Salud.**

La STS, 4ª, 23-1-24, RC 8444/2021, ECLI:ES:TS:2024:417 concluye que tratándose de personal estatutario interino, a efectos del reconocimiento del grado de carrera profesional, es conforme con la cláusula 4 del Acuerdo Marco que el tiempo de servicio exigido para tal reconocimiento se acote al prestado en el servicio de salud que le nombra si esa limitación se prevé también para el fijo; pero será discriminatorio si para el personal estatutario fijo se prevé que el tiempo de servicios para progresar de grado se refiera al tiempo de servicios en el Sistema Nacional de Salud. Asimismo, la sentencia concluye que tratándose de personal estatutario interino respecto de los elementos integrantes de la carrera profesional del artículo 40.2 del EMPSS, cabe invocar también los adquiridos y consolidados en otro servicio de salud en el que prestó servicios con exclusión de aquellos conocimientos, experiencias o cumplimiento de objetivos que sean específicos del servicio de salud en el que se prestaron servicios mediante una relación estatutaria ya extinguida

**3.19.- El reconocimiento en sentencia firme que las patologías determinantes de la jubilación por incapacidad permanente son consecuencia directa del servicio vincula al gestor de Clases Pasivas para el reconocimiento de la pensión extraordinaria de jubilación,**

La STS, 4ª, 18-01-24, RC8570/2021, ECLI:ES:TS:2024:162, declara que el reconocimiento en sentencia firme de que las patologías determinantes de la jubilación por incapacidad permanente son consecuencia directa del servicio vincula al órgano gestor de Clases Pasivas a efectos del reconocimiento de la pensión extraordinaria de jubilación.

**3.20.- Función Pública. Cese de puesto de libre designación. Efectos.**

La STS, 4ª, 15-01-24, RC8376/2021, ECLI:ES:TS:2024:86 concluye que, salvo que proceda la retroacción de las actuaciones a la vía administrativa, la anulación por falta o insuficiencia de motivación del cese en un puesto de libre designación implica la reposición del cesado en dicho puesto, con todos los derechos profesionales y económicos correspondientes.

**3.21.- Cuando la pretensión verse sobre el reconocimiento de un derecho funcional, el pleito se tendrá como de cuantía indeterminada al margen de la cuantificación de los trienios.**

La STS, 4ª, 10-01-24, RC 8347/2021, ECLI:ES:TS:2024:93 determina que un pleito será de cuantía determinada o determinable a efectos de apelación si lo litigioso se ciñe al cálculo de los trienios (periodos, cuantificación, actualización y devengo de intereses); ahora bien, si se litiga por el presupuesto, esto es, por el reconocimiento del derecho a percibirlos en la cuantía consolidada como contratado laboral, la pretensión económica -la cuantía de lo reclamado y su cálculo- va supeditada al reconocimiento previo de un derecho, luego habrá que concluir que estamos ante un pleito de cuantía indeterminada a efectos de apelación.

### **3.22.- Cómputo del tiempo de vacaciones como "servicio efectivo".**

La STS, 4ª, 28-02-24, RC 756/2022, ECLI:ES:TS:2024:948 determina que resulta discriminatorio para el personal temporal en relación con el personal fijo que no se compute el tiempo de vacaciones compensadas económicamente como tiempo de servicios prestados

### **3.23.- Carrera horizontal. Cómputo de servicios prestados como personal laboral, cuando adquiere la condición de personal funcionario. Importe como personal laboral.**

La STS, 4ª, 26-02-24, RC 323/2022, ECLI:ES:TS:2024:950 determina que la falta de impugnación de la resolución que reconoció en su día, a efectos de trienios, los servicios prestados en régimen laboral y su equiparación al Cuerpo funcional de nuevo ingreso, no impide que quien ya es funcionario pueda reclamar su percepción en la cuantía que tenían como personal laboral.

### **3.24.- Trienios. Derecho a que los trienios reconocidos como personal laboral sean abonados, tras adquirir la condición de personal funcionario, en la cuantía correspondiente al momento en que fueron perfeccionados.**

La STS, 4ª, 20-02-24, RC8466/2021, ECLI:ES:TS:2024:866 declara que, en relación con el principio de irretroactividad de las normas, los funcionarios que antes de la reforma del artículo segundo de la Ley 70/1978 por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, solicitaron y se les reconocieron los servicios prestados como contratados laborales, al estar consolidados, podrán solicitar y percibir en la cuantía que tuvieran al tiempo de perfeccionarse como contratado laboral.

### **3.25.- Relación de Letrados de los servicios jurídicos con sus respectivas Administraciones.**

La STS, 4ª, 5-02-24, RC 8849/2021, ECLI:ES:TS:2024:588 declara que considerando que, para actuaciones contenciosas, los letrados integrantes de un servicio jurídico municipal actúan conforme a las reglas del ejercicio de la abogacía y, como funcionarios, con sujeción al principio de jerarquía, subordinados al ayuntamiento para el que prestan sus servicios, debiendo desempeñar esas funciones con sujeción a los principios de actuación, éticos, de conducta y a los deberes que prevé el EBEP y conforme a los criterios de actuación profesional que fije esa Administración, el Ayuntamiento al que defienden puede dictar instrucciones u órdenes de servicio que ordenen la actuación de esos servicios jurídicos para ejercer la facultad que les concede el artículo 54.2 de la LJCA. Esta ordenación no es de naturaleza procesal sino de régimen organizativo o interno.

**3.26.- Cómputo de los servicios previos en la Administración del personal laboral fijo discontinuo: debe comprender todo el tiempo de la relación laboral, incluidos los intervalos sin llamadas.**

La STS, 4ª, 6-03-24, RC 723/2023, ECLI:ES:TS:2024:1284, determina que a efectos del cómputo de los servicios previos en la Administración de los trabajadores fijos discontinuos, debe tenerse en cuenta todo el tiempo de duración de la relación laboral.

**3.27.- Si la nulidad de una disposición general (las Directrices de Ordenación y Clasificación de los Puestos de Trabajo) implica, de modo necesario, la declaración de nulidad de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por acuerdo de la Administración.**

La STS, 4ª, 19-03-24, RC 8889/2021, ECLI:ES:TS:2024:1574, concluye que las Directrices sean una disposición declarada nula por sentencia firme y que las Directrices hayan sido tenidas en cuenta a la hora de elaborar la RPT no significa necesariamente que la RPT sea un acto de aplicación de aquellas, en el sentido del art. 73 de la LJCA.

**3.28.- La nota de corte que debe aplicarse cuando se anula la declaración de "no apto" en una prueba de un proceso selectivo y se ordena que el interesado se someta a las pruebas de un proceso posterior es la correspondiente a esta última.**

La STS, 4ª, 20-03-24, RC 8601/2021, ECLI:ES:TS:2024:1624, determina que, en la medida en que la prueba psicotécnica a realizar con la promoción en curso ha de presentar la misma o parecida dificultad y características, tiempo de respuesta y tipos de problemas que la de la promoción de origen, la solución procedente es que a todos los aspirantes, ya concurran en virtud de sentencia ya lo hagan por primera vez, se les aplique la nota de corte fijada para la convocatoria en que tiene lugar dicha prueba.

**3.29.- Abogado Fiscal que desempeña las mismas funciones que los Fiscales de su localidad: no tiene derecho a las diferencias retributivas con respecto a estos últimos. Véase la STS n º 1648/2023.**

La STS, 4ª, 4-04-24, RC 3908/2023, ECLI:ES:TS:2024:1930 determina que en la Carrera Fiscal no existe un derecho al abono de las diferencias retributivas cuando se produce una distribución igualitaria de asuntos entre funcionarios de distinta categoría.

**3.30.- Un miembro de la carrera judicial con la categoría de Juez no puede percibir el salario base de Magistrado, como retribución básica, cuando sirve plaza de órgano judicial adscrita a la categoría de Magistrado.**

La STS, 4ª, 9-04-2024, RC 1907/2022, ECLI:ES:TS:2024:1931 concluye que un miembro de la carrera judicial con la categoría de Juez no puede percibir el sueldo de Magistrado, como retribución básica, cuando sirve plaza de órgano judicial adscrita a la categoría de Magistrado.

#### **4.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**

##### **4.1.- Contratación pública. Empresas que reciben fondos públicos. Situación ventajosa incompatible con el principio de libre concurrencia en contratación pública.**

La STS, 3ª, 2-10-23, RC 787/2021, ECLI:ES:TS:2023:3972, en respuesta a la cuestión de interés casacional planteada, en concreto, determinar si la participación en la licitación de un contrato por quien percibe dotaciones presupuestarias que suponen más del 80% de sus recursos, coloca al licitador en una situación ventajosa incompatible con el principio de libre concurrencia en contratación pública, en comparación con la de otros operadores económicos privados concluye que las empresas que reciban fondos públicos pueden participar en procesos de licitación para la adjudicación de un contrato público, concurriendo con otras entidades privadas sin que ello lesione, en principio, la libre competencia. Puntualizando que únicamente resulta posible excluir una entidad que recibe financiación pública de un procedimiento de licitación en caso de que realizase una oferta anormalmente baja debido a la obtención de una ayuda de Estado o en caso de recibir subvenciones o ayudas no conformes a derecho, a ello añade la sala que el hecho de que dicha entidad pública mantenga una contabilidad separada entre sus actividades realizadas como operador económico en el "mercado privado" y sus restantes actividades es un elemento relevante a los efectos de descartar la existencia de ayudas que desvirtúen la competencia.

##### **4.2.- Contrato. Inclusión de cláusula, para repercutir el IBI sobre el arrendatario o cualquier otro tributo municipal donde radique la vivienda arrendada**

La STS, 3ª, 6-11-23, RC 1574/2021, ECLI:ES:TS:2023:4582 concluye que en los contratos de arrendamiento de las Viviendas de Protección Oficial de iniciativa privada, en los que es aplicable el apartado 4º de la Disposición Adicional 1ª de la LAU, las cantidades que corresponden percibir al arrendador son las rentas iniciales o las actualizadas y los servicios prestados en la vivienda, sin que pueda repercutir el Impuesto de Bienes Inmuebles de la vivienda arrendada al arrendatario, por no tener la naturaleza ni consideración de servicio, sin que en este aspecto rijan la libertad de pactos entre las partes dada la previsión específica y particular del apartado 4º de la D.A 1ª LAU.

##### **4.3.- Contratación. Compensación por modificación unilateral de una concesión por la administración local: indemnización automática por aumento de coste o disminución de ingresos (art. 127.2 del reglamento de**

**servicios de las corporaciones locales) o atendiendo al principio de equilibrio económico de la globalidad del contrato.**

La STS, 3ª, 16-10-23, RC 1339/2021, ECLI:ES:TS:2023:4716 determina que el equilibrio concesional es un principio rector de la contratación administrativa reconocido en nuestra legislación, la cual también contempla, como no podía dejar de ser, diversas alteraciones que pueden ocurrir en la vida de un contrato concesional y las consecuencias que derivan de tales eventualidades. La modificación del equilibrio concesional que ha de ser indemnizada al margen de las concretas cuentas de la gestión de la concesión y del riesgo y ventura del concesionario.

#### **4.4.- Contratación. Legitimación de un integrante de una unión temporal de empresas (UTE) para actuar individualmente en defensa de sus derechos para impugnar actuaciones administrativas adoptadas en la adjudicación de un contrato administrativo.**

La STS, 3ª, 7-11-23, RC 922/2021, ECLI:ES:TS:2023:4735 viene a reiterar la jurisprudencia existente en la materia: la interpretación del artículo 19.1.a) de la Ley de la Jurisdicción en relación con el principio pro actione, en las particulares circunstancias del caso, lleva a concluir que un integrante de una unión temporal de empresas (UTE) tiene un interés legítimo para actuar individualmente en defensa de sus derechos para impugnar actuaciones administrativas adoptadas en la adjudicación de un contrato administrativo.

#### **4.5.- Modificación de revisión de precios en la liquidación del contrato después del certificado final de obra**

La STS, 3ª, 16-11-23, RC 1331/2021, ECLI:ES:TS:2023:5132, concluye que, en lo que se refiere a las prestaciones económicas derivadas del contrato, el certificado final de las obras ejecutadas es un acto provisional o a cuenta de la liquidación final del contrato y, por tanto, los pagos derivados de la certificación final de las obras son susceptibles de regularización o ajuste en la liquidación final del contrato, sin necesidad de acudir para ello a la declaración de lesividad de la certificación final de las obras ejecutadas.

#### **4.6.- Subsanación de documentación aportada en procedimiento de contratación**

La STS, 3ª, 20-11-23, RC 6806/2020, ECLI:ES:TS:2023:5134, considera que una interpretación literalista que impida la adjudicación de un contrato por simples defectos formales, fácilmente subsanables, es contraria al principio de libre concurrencia que debe presidir la contratación administrativa. Añade que debe considerarse no subsanable la falta de cumplimiento de un criterio en el momento del cierre del plazo de presentación de proposiciones, y como subsanables los simples defectos en la acreditación del cumplimiento en plazo de ese criterio, sin que quepa que por la vía de subsanación se modifique o altere de alguna forma la oferta presentada.

#### **4.7.- Contratos de obra. Tipo de interés aplicable a la mora de la Administración en el pago de certificaciones de obra.**

LA STS, 3ª, 7-3-24, RC 7852/2020, ECLI:ES:TS:2024:1412 concluye que con anterioridad a la reforma operada en la Ley 3/2004 por la Ley 11/2013, de 26 de julio, la Administración podía pactar un interés distinto al fijado legalmente, pues la extensión mediante la citada reforma a las Administraciones públicas de la limitación existente hasta entonces para el resto de sujetos no es aplicable con carácter retroactivo

### **5. CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO (ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA)**

#### **5.1.- Legitimación activa de Colegios Profesionales para la impugnación de pliegos de contratación.**

La STS- 27-02-2024 (Rc 7921/2020) ECLI:ES:TS:2024:1279, partiendo de doctrina constitucional y de precedentes de la Sala de lo Contencioso-administrativo, afirma que en este caso concreto existe una conexión o vínculo unívoco entre las funciones que tiene atribuida la Corporación recurrente (el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos), en virtud de lo dispuesto en los artículos 1.3 y 5 g) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, y del artículo 18 de la Ley del Parlamento de Andalucía, 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la fundamentación jurídica de las pretensiones deducidas en el proceso, que conciernen al interés concreto y específico de preservar la calidad técnica de la intervención de los arquitectos en la redacción de proyectos de construcción de edificios, que afecta, por tanto, a los intereses colectivos de la profesión.

#### **5.2.- Derecho sancionador. Abogados. Defensa de la competencia. Principio non bis in idem.**

La STS- 22-11-2023 (Rc 44/2022) ECLI:ES:TS:2023:5260 plantea en casación si puesta de manifiesto la firmeza de la sanción colegial por incumplimiento de las normas deontológicas por competencia desleal, es posible continuar con el procedimiento de defensa de la competencia -por competencia desleal- sin incurrir en vulneración del non bis in idem procesal. La Sala, aplicando la jurisprudencia del TEDH sobre el Protocolo 7 del CEDH y del TC, señala que aun cuando parcialmente los hechos pudieran ser coincidentes, el procedimiento disciplinario y el posterior de la Agencia de la Competencia tienen un distinto alcance y relevancia fáctica y material. Dichas notas diferenciadoras, hacen inaplicable el principio non bis in idem, incidiendo en la diversa naturaleza de un procedimiento y otro. El principio non bis in idem no es de aplicación en los



supuestos en los que una de las sanciones impuestas no reviste naturaleza penal, y este principio no excluye que se articulen procedimientos sancionadores con fines diferentes que protegen distintos bienes jurídicos, siempre que sean compatibles entre sí y formen un todo coherente.

### **5.3.- Registradores propiedad. Informatización de los Registros. Función pública registral. Publicidad y legalidad registral. Firma electrónica certificada.**

La STS- 11-10-2023 (Rc 1977/2023) ECLI:ES:TS:2023:4329, declara que el artículo 17 k) de los Estatutos generales del Colegio de Registradores , interpretado a la luz de lo dispuesto en el artículo 4 de los Estatutos, que fija los fines y funciones de la referida Corporación de Derecho Público, no se opone a que la Asamblea de Decanos Territoriales o Autonómicos del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España apruebe instrucciones o directrices de carácter técnico o instrumental en materia informática, que contribuyan a impulsar la digitalización de la función pública registral, mediante la imposición de criterios uniformes tendentes a garantizar el buen y correcto funcionamiento de las aplicaciones informáticas de gestión registral, y a asegurar la uniformidad en la recuperación de los datos y a la revalorización de las bases de datos, siempre que se adopten de forma acorde con el sistema registral establecido en la legislación hipotecaria.

## **6.- DERECHO DE LOS SECTORES REGULADOS Y DERECHO DE LA COMPETENCIA**

### **6.1.- SECTOR ENERGÉTICO**

#### **6.1.1. - Necesidad de acudir por parte del Ministerio a los cauces fijados en el ordenamiento para modificar la retribución base pese a la propuesta de la CNMC de revisión de aquella.**

La STS- 06-03-2024 (Rc 898/2022) ECLI:ES:TS:2024:1386 resuelve el recurso presentado contra la Orden TED/749/2022, de 27 de julio, por la que se aprueba el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016, se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras, y se aprueba la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para los años 2017, 2018 y 2019. Incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica. La revisión de los factores a computar en el cálculo no se comprende en la previsión del art.32.4 del RD 1048/2013. La previsión reglamentaria de carácter general no deja sin objeto la previsión mucho más específica de inmutabilidad del inmovilizado base bruto ni puede resultar contraria a lo dispuesto a los mecanismos de revisión previstos en los artículos 106 y ss. de la Ley 39/2015. Imposibilidad del Ministerio de modificar la

retribución al margen de los cauces fijados en el ordenamiento pese a la posibilidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de proponer al Ministerio la revisión de la retribución cuando, como consecuencia de su actividad inspectora detecta variaciones que influyan en la retribución reconocida a las empresas.

#### **6.1.2.- Falta de legitimación activa de asociación para impugnar el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la planificación de la red de transporte de energía eléctrica Horizonte 2026. Mera defensa de la legalidad.**

La STS- 28-02-2024 (Rc 643/22) ECLI:ES:TS:2024:1172, la Sala distingue entre el objeto de la planificación general y los proyectos que la desarrollan, señalando que no es misión de la planificación alcanzar los aspectos concretos de trazados y emplazamientos de las instalaciones, cuestiones éstas que con su correspondiente estudio de impacto ambiental corresponden a los proyectos singulares comprendidos en la planificación. Analiza también la legitimación activa ad causam de las asociaciones, apreciando que en este caso no concurre interés legítimo en la Asociación recurrente ni tampoco se realiza defensa de intereses colectivos, sino que las pretensiones se deducen en un interés de defensa de la legalidad.

#### **6.1.3. Modelo retributivo de la actividad de distribución de la energía eléctrica. Recálculo del coeficiente lambda base por la reconsideración de subvenciones.**

La STS- 28-02-2024 (Rc 894/22) ECLI:ES:TS:2024:1267 en el que se impugna la Orden TED 749/2022, de 27 de julio, por la que se aprueba el incentivo o penalización para la reducción de pérdidas en la red de distribución de energía eléctrica para el año 2016, se modifica la retribución base del año 2016 para varias empresas distribuidoras, y se aprueba la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para los años 2017, 2018 y 2019. Se cuestiona la facultad de la Administración de desvincularse de la fijación del coeficiente lambda base para 2016. La Sala explica el sistema de cálculo de la retribución anual de la actividad de distribución en base al coeficiente lambda base. Este coeficiente, para el año 2016, tuvo que rectificarse en base a SSTS de 25-10-2017, 31-10-2017 y 28-1-2019. Señala la Sala que la Administración no puede modificar los valores que sirven para calcular el inmovilizado base bruto fijado para el primer año del periodo regulatorio (con las modificaciones necesarias que deben introducirse en ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo) al tiempo de establecer la retribución de los restantes años que integran el periodo regulatorio, salvo que utilice los mecanismos de revisión de oficio. Véase, en parecido sentido, STS- 26-02-2024 (Rc 826/22) ECLI:ES:TS:2024:1369.

#### **6.1.4. Eficiencia energética. Condiciones para el ejercicio de facultades de comprobación por parte de la CNMC sin necesidad de previa inspección in situ de la instalación de cogeneración**

La STS- 28-02-2024 (Rc 8913/2022) ECLI:ES:TS:2024:1406 señala que el artículo 32.2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, no se opone a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejerza las facultades de comprobación que tiene atribuidas, y que le habilitan legítimamente para supervisar y controlar el sector eléctrico, con el objeto de verificar el debido cumplimiento de las condiciones de eficiencia energética, sin necesidad de realizar una previa visita de inspección in situ de la instalación de cogeneración, cuando se deduzca de forma clara de la certificación de los datos comunicados por la empresa titular de la instalación que no ha cumplido las condiciones de eficiencia energética exigidas.

#### **6.1.5.- Energía eléctrica. Red de distribución.**

La STS- 13-11-2023 (Rc 604/22) ECLI:ES:TS:2023:4678, la Sala señala que la planificación en el ámbito del transporte y distribución de energía eléctrica, y los documentos de planificación energética acordados por el Consejo de Ministros, describen los rasgos generales de las futuras infraestructuras e instalaciones, cuya necesidad y prioridad e incluso urgencia se reconoce. Se objeta a la propuesta de la actora que no cumplía los requisitos técnicos exigidos. La Sala descarta la falta de motivación puesto que, aunque el Consejo de Ministros no ofreció explicación sobre ello, si lo hizo en la precedente tramitación de la planificación y resulta justificada en el dato técnico, obrante en el expediente, de que la subestación no tenía la consideración de activo de transporte, ni cumplía el requisito de potencia mínima para una conexión de demanda a la red de transporte peninsular, al ser su función la de apoyo a la red de distribución de la entidad.

#### **6.1.6. Efectos del doble silencio administrativo en las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica. Servicio público**

La STS- 17-10-2023 (Rc 5577/22) ECLI:ES:TS:2023:5042 declara que los efectos del doble silencio administrativo en las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, en concreto en relación a la solicitud de cierre de las plantas de ciclo combinado, son las determinadas por la disposición del artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que "cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa", sin que sea de aplicación la excepción prevista en el propio precepto referida a los supuestos en que, como consecuencia de la estimación, se transfieran al solicitante o a terceros

facultades de servicio público. No nos encontramos ante una actividad que se encuentra definida como un servicio público, sino ante el concepto autónomo y diferenciado de servicio de interés económico general, en el que el operador parte del derecho a ejercer su libertad empresarial, si bien sometido a las potestades pública. Una vez operado el silencio administrativo por concurrir los presupuestos necesarios para ello, no cabe un examen sobre la legalidad del acto presunto al margen de los procedimientos de revisión establecidos legalmente.

#### **6.1.7. Cancelación de aval por cancelación de la inscripción en el Registro de Preasignación de retribución para instalaciones fotovoltaicas. Prescripción. Plazos. Dies a quo.**

La STS- 11-10-2023 (Rc 1725/22) ECLI:ES:TS:2023:4482, señala que los procedimientos de cancelación de la inscripción en el Registro de Preasignación de retribución para instalaciones fotovoltaicas del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, se siguen directamente con el titular de la inscripción, sin perjuicio de que el avalista pueda comparecer en los mismos; y en el de ejecución de la garantía, diferente del anterior, es parte en el procedimiento el prestador de la garantía o aval, al que ha de notificarse la incoación. El plazo máximo de un mes para que el órgano competente proceda a iniciar el procedimiento de ejecución o cancelación del aval, en los casos de cancelación por incumplimiento de la inscripción en el registro de preasignación de retribución, establecido por el artículo 8.4 del Real Decreto 1578/2008, es un plazo procedimental, cuya naturaleza no impone que su incumplimiento de lugar a la anulabilidad del acuerdo que ponga fin a dicho procedimiento. El plazo de prescripción de la acción para reclamar la ejecución del aval, en el caso del citado artículo 8.4 del RD 1578/2008, es el de 4 años establecido por el artículo 15 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. El inicio del plazo de prescripción de la acción para reclamar la ejecución del aval, en el caso del artículo 8.4 del RD 1578/2008, se sitúa en la fecha de la cancelación de la inscripción en el registro de preasignación de retribución, o en su caso en la fecha de la recepción de la comunicación de dicho hecho.

#### **6.1.8. Determinación del hecho de que la evaluación ambiental del art.19.1 de la Ley 21/2013 se refiere al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía y no a cada uno de los proyectos encuadrados en el mismo considerados individualmente.**

La STS- 17-07-2023 (Rc 625/22) ECLI:ES:TS:2023:3370, establece la necesidad de que el PDRTEE sea objeto de evaluación estratégica ordinaria (Ley 21/2013 de evaluación ambiental). Planteamiento de vulneración de la fase de información pública establecida en el art.19.1 de la Ley 21/2013, conclusión: inexistencia de vulneración por no haber consultado de manera específica, en este caso, al Ayuntamiento recurrente. El PDRTEE es un documento de alcance mucho más amplio y general que el de cada uno de los proyectos que se encuadran dentro del mismo y en este supuesto la evaluación ambiental no viene

referida a uno o varios proyectos concretos en los que el citado ayuntamiento pueda considerarse directamente concernido.

#### **6.1.9. Energía eléctrica. Nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica y renovaciones. Compatibilidad. Silencio administrativo.**

La STS- 17-07-2023 (Rc 758/22) ECLI:ES:TS:2023:3510, plantea en casación si la naturaleza de los procedimientos de compatibilidad que regula el art. 2 de la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, deben considerarse integrados en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico o si, por el contrario, son ajenos a la misma; todo ello a efectos de determinar el sentido -positivo o negativo- del silencio de la solicitud de compatibilidad. El artículo 2 de la Ley 17/2013 estableció un procedimiento para que las instalaciones de producción de energía eléctrica, o la renovación de las existentes en territorios insulares y extrapeninsulares pudieran ser declaradas compatibles con los criterios técnicos. Para tener derecho al régimen retributivo adicional destinado a la actividad de producción en dichos territorios es necesario la autorización de resolución favorable de la Dirección General de Política Energética y Minas que determina con carácter previo la compatibilidad.

### **6.2.- TELECOMUNICACIONES Y SECTOR AUDIOVISUAL**

#### **6.2.1.- Posibilidad de que las asociaciones sin ánimo de lucro presten servicios audiovisuales de carácter comercial y presentarse a concursos para adjudicación de licencias de estas características.**

La STS- 04-03-2024 (Rc 3821/2022) ECLI:ES:TS:2024:1422, concluye que ni la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, ni la LO 1/2002 reguladora del Derecho de Asociación excluyen que las asociaciones sin ánimo de lucro puedan prestar servicios audiovisuales de carácter comercial y, en consecuencia, presentarse a los concursos para adjudicación de licencias de estas características, con independencia de exista la posibilidad de que puedan también prestar servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales en los términos previstos en el art. 32 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

#### **6.2.2. - Convocatoria de concurso público para el otorgamiento de licencias de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora disponibles en la comunidad autónoma de Castilla y León.**

La STS- 28-02-2024 (Rc 3911/2020) ECLI:ES:TS:2024:1277, siguiendo la doctrina jurisprudencial expuesta en las sentencias de 17 de diciembre de 2020

(RC 7934/2019) y de 1 de marzo de 2021 (RC 388/2020), debe referir que si bien es cierto que las libertades constitucionales de expresión e información traen como consecuencia que, en principio, todo el espectro radioeléctrico libre debe estar disponible para su utilización tanto por las Administraciones Públicas como por ciudadanos y medios de comunicación que pretendan difundir las ideas e información que consideren oportunas, como se dijo en la sentencia de 9 de enero de 2020. Pero como es natural y ha sido también declarado en jurisprudencia previa, dicha disponibilidad no es absoluta, sino que está condicionada a razones técnicas, compromisos internacionales y regulación nacional, entre la que destaca por su relevancia para el presente caso la planificación técnica del espacio radioeléctrico. En consecuencia, salvo que la regulación vigente pueda incurrir en inconstitucionalidad por su carácter injustificadamente restrictivo o arbitrario, hay que estar a lo establecido por ella. Lo anterior permite entender que hay que estar a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley General de Comunicación Audiovisual en cuanto al establecimiento de requisitos y plazos para la convocatoria de concursos de licencias audiovisuales que puedan estar vacantes. El transcurso de los plazos sin interesado supone que la reserva de dominio decaerá y será excluida de la planificación.

#### **6.2.3. Cuantía de la compensación económica del art. 19.4 de la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual por el acceso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónica a los estadios y recintos para retransmitir acontecimientos deportivos.**

La STS- 18-07-2023 (Rc 1126/15) ECLI:ES:TS:2023:3372, establece que las normas de derecho derivado de la UE establecen un régimen jurídico específico para la retransmisión por televisión que no se extiende a las retransmisiones por radio. La compensación prevista en el artículo 19.4 LGCA debe tener como factores de determinación: el pago por temporada o cada vez que se acceda a un estadio, amortización de las cabinas y costes de organización de los servicios. El acceso es libre y así lo declara la Ley si bien la cantidad que debe abonarse a los clubes, lo es para compensarles de los gastos y costes que les supone poner a disposición de las radios un espacio adecuado, en cabinas acondicionadas, para ejercer el derecho de retransmisión.

### **6.3.- TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS**

#### **6.3.1.- Derecho a la información. Servicios Funerarios. Límites al derecho a la información. Afectación a los intereses económicos.**

La STS- 08-04-2024 (Rc 681/22) ECLI:ES:TS:2024:2249, considera que el acceso a la información se encuentra limitado en la propia LTAIGB, en lo que aquí interesa, ex apartado h) del artículo 14, a aquellos supuestos que no resulten perjudicados los intereses económicos o comerciales. La solicitud es sumamente genérica de exhibición de unas cuentas que contienen datos internos sobre gastos relevantes que evidencia la actuación comercial y

económica de la empresa, sin especificar no obstante, ni concretar los asientos contables o las singulares actuaciones económicas a los que se refiere la solicitud, como podría ser compras en un período de tiempo, pagos por arrendamientos, disposiciones de efectivo y otras. Por tal razón, puede afirmarse que el acceso a la contabilidad reclamada de forma generalizada en los epígrafes indicados, afecta a priori y per se a los intereses económicos de la empresa, por descubrir datos sensibles internos que plasman la realidad de su funcionamiento, que presentan un valor en el mercado y que pueden ser utilizados por competidoras.

#### **6.3.2.- Derecho al olvido. Derecho de supresión respecto de datos personales correspondientes a una persona fallecida. Inexactitud parcial de la información.**

La STS- 04-03-2024 (Rc 7418/2022) ECLI:ES:TS:2024:140, declara que el derecho de supresión (derecho al olvido) de los datos de una persona fallecida está reconocido en nuestro ordenamiento. Pero, la singularidad que implica que el derecho de supresión se ejercite respecto de datos personales correspondientes a una persona fallecida no suprime la necesidad de ponderar la protección de datos del difunto con otros derechos y libertades en conflicto a la luz de nuestras normas y de la jurisprudencia existente. Alegada la inexactitud parcial de una información que afecta a una persona fallecida, y que aparece incorporada a una investigación histórica y científica, la exigencia de exactitud de lo afirmado se aminorar y debe ponderarse también la trascendencia de la inexactitud en el conjunto de la información aparecida.

#### **6.3.3.- Aplicación a las autoridades portuarias de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Datos referidos a organigrama, plantilla y funcionarios.**

La STS- 11-12-2023 (Rc 628/2022) ECLI:ES:TS:2023:5514, afirma que las autoridades portuarias, en cuanto organismo público integrado en el sector público estatal, le resulta aplicable la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (art. 2.1.c). Los datos referidos a su organigrama, plantilla y los funcionarios que prestan servicios en ella están sujetos a una obligación general de transparencia en su estructura y funcionamiento que abarca no solo una publicidad activa sino también la sujeción al deber de proporcionar información solicitada en el ejercicio del derecho de acceso a la información. El acceso a la información referida la retribución y la titulación exigida para ocupar los cargos de las Administraciones públicas o de organismos y entidades del sector público debe ser, en principio, la regla general, y no solo opera respecto de los cargos de confianza y libre designación sino también respecto del personal técnico que los integran, pues el acceso dichos puestos con la titulación necesaria y el respeto al régimen retributivo previsto forma parte del control de los entes públicos y, por tanto, tiene un destacado interés público.

#### **6.3.4.- Aplicación de la Ley 19/2023 ante solicitud de acceso a información pública a una Administración para aportarla en procedimiento judicial.**

La STS- 28-11-2023 (Rc 6445/2021) ECLI:ES:TS:2023:5524 establece que la DA primera, párrafo segundo, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es aplicable únicamente en una materia que tenga prevista un régimen jurídico específico de acceso a la información, condición que no está presente en nuestro caso, pues los artículos 56 LJCA y 286 LEC no regulan un régimen jurídico específico de acceso a la información, sino las vías procesales de aportación de documentos y otras pruebas a un procedimiento jurisdiccional. La existencia de la normativa procesal que regula la petición y presentación de la prueba documental en un procedimiento judicial, como los artículos 56 LJCA y 286 LEC, no constituye por si sola ningún obstáculo para la aplicación de la LTAIBG en relación con la solicitud por el interesado de acceso a la información pública a una Administración, con la finalidad de aportarla a un procedimiento en defensa de sus pretensiones contra dicha Administración, todo ello sin perjuicio, naturalmente, de las causas de inadmisión y límites al derecho de acceso que contempla la citada Ley 19/2013.

#### **6.3.5. Protección de datos. Utilización por la AEAT de datos de carácter personal de terceras personas físicas distintas al obligado tributario.**

La STS- 22-11-2023 (Rc 5352/22) ECLI:ES:TS:2023:5692, establece que el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el artículo 6.2 c) y e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que disponen que el tratamiento de datos personales será lícito, entre otros supuestos, cuando sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, o cuando sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, no se oponen a que la AEAT, en el curso de la tramitación y resolución de un procedimiento de gestión, inspección o recaudación tributaria, utilice datos de carácter personal de terceras personas físicas, distintas al sujeto obligado tributario sometido al expediente administrativo, siempre y cuando el tratamiento de los datos se ampare en las facultades que se confieren a las autoridades tributarias para luchar contra el fraude fiscal, que la inclusión de los datos se limite a aquellos que se revelen adecuados, idóneos, pertinentes y necesarios para la determinación de los hechos y motivar las resoluciones que se adopten, y que sea proporcionada al fin legítimo perseguido.



#### **6.3.6. Concesión de estatuto de persona denunciante a funcionario por denuncia de hechos presuntamente delictivos.**

La STS- 20-07-2023 (Rc 359/22) ECLI:ES:TS:2023:3426 tenía por objeto determinar si resultaba aplicable la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que no ha sido traspuesta en plazo, y ello con independencia de su invocación en la instancia, y para el caso de que la respuesta a dicha cuestión sea afirmativa, las consecuencias que de ello se derivan en el caso concreto enjuiciado: la concesión de estatuto de persona denunciante a funcionario por denuncia de hechos presuntamente delictivos. Según la Sala, en ningún caso puede afirmarse que el texto de la Directiva lleve inexcusablemente a interpretar la ley valenciana en el sentido propugnado por la Agencia recurrente. La Directiva tiene dos vertientes, la orgánica y procedimental por un lado y la de reconocimiento de situaciones subjetivas, por otro. De ninguna de esas vertientes ni de ningún precepto en concreto se puede deducir un criterio o previsión que llevase de manera ineludible, incluso aunque tuviese la Directiva una efectiva vinculación directa en el momento de dictarse la sentencia recurrida, a interpretar la ley valenciana en el sentido propugnado.

### **6.4.- MERCADOS FINANCIEROS**

#### **6.4.1.- Impugnación de liquidación del saldo de compensación. Convenio AGE-Autopistas Concesionaria Española, S.A.**

La STS- 24-01-2024 (Rc 307/22) ECLI:ES:TS:2024:220, interpreta el Convenio de la concesión de las autopistas y el modo y forma en que se convino articular el restablecimiento del equilibrio financiero de la concesión como consecuencia de las inversiones asumidas por la concesionaria. Para interpretar el Convenio, la Sala parte de las manifestaciones de las partes como expresión de su voluntad, expresadas en los pactos y cláusulas del contrato. Considera que el Estado se comprometió a compensar las nuevas obligaciones asumidas por la concesionaria (ampliación de carriles de la autopista entre otras) con la idea de que las inversiones realizadas por ésta tuvieran correlación con la compensación que habría de asumir el Estado. Con tal interpretación, la Sala descarta la interpretación de las fórmulas matemáticas que realiza el Estado, interpretación que además juzga errónea en cuanto atenta contra el régimen básico de las concesiones administrativas. No obstante, la Sala tampoco atiende a los cálculos que presenta la concesionaria.

#### **6.4.2.- Sanción por infracción de la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Cuantía de la multa, principio de proporcionalidad y aplicación retroactiva de la normativa posterior más favorable.**

La STS- 27-06-2023 (Rc 3/22) ECLI:ES:TS:2023:2773 estima el recurso por considerar vulnerado el principio de proporcionalidad en la cuantificación de la sanción y la procedencia de aplicar retroactivamente la norma sancionadora más favorable, que fue aprobada con posterioridad por Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto. La sanción impuesta en este litigio se basa en la previsión que aparecía contenida en el art. 57.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en la redacción entonces vigente, en cuya virtud el incumplimiento de la obligación de declarar que tienen las personas físicas a la salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera se considera una infracción grave a la que "se impondrá la sanción de multa cuyo importe mínimo será de 600 euros y cuyo importe máximo podrá ascender hasta el duplo del valor de los medios de pago empleados".

**6.4.3.- Afectación, a efectos de caducidad, a todos los sujetos incurso en un procedimiento sancionador tramitado contra una entidad crediticia y sus directivos por la suspensión por razón de petición de informe preceptivo al Banco de España (art.273 TRLMV).**

La STS- 20-06-2023 (Rc 8651/21) ECLI:ES:TS:2023:2803 la suspensión de un procedimiento sancionador tramitado contra una entidad crediticia y sus directivos por la comisión de una infracción grave contemplada en el TRLMV por razón de la petición del informe preceptivo al Banco de España previsto en el artículo 273 de dicho Texto Refundido, afecta y opera para todos los sujetos incurso en el procedimiento, tanto a la entidad financiera como a aquellos que ejercen cargos de dirección y administración ex artículo 307 del mismo texto legal, a los efectos de la caducidad del procedimiento sancionador.

**6.4.4.- Consideración de la previsión contenida en el art. 529 TRLSC como regla general que exige a las entidades de interés público disponer de una comisión de auditoría propia.**

La STS- 19-06-2023 (Rc 3537/22) ECLI:ES:TS:2023:2761 resuelva la imposición de multa por infracción grave a las entidades recurrentes por no contar con una comisión de auditoría propia. Incumplimiento de la Ley de Auditoría de Cuentas cuando una entidad de interés público no dispone de comisión de auditoría propia y las funciones que corresponderían a esta son ejercidas por la Comisión de auditoría de la empresa matriz. Consideración, salvo en los casos excepcionales legalmente previstos. que la previsión contenida en el art. 529 TRLSC es una regla general que exige a las entidades de interés público disponer de una comisión de auditoría propia.

**6.5.- TRANSPORTE**

#### **6.5.1. - VTC. Compatibilidad de la regla de proporcionalidad 1 VTC/Taxis con el TFUE. Reformatio in peius.**

En la STS- 22-04-2024 (Rc 975/23) ECLI:ES:TS:2024:2027 se remite a lo ya resuelto por el TJUE: la limitación genérica de autorizaciones VTC/Taxis en la proporción 1/30 no vulnera el art. 107 TFUE al no suponer una ayuda implícita del Estado al sector del taxi; solamente resulta contraria a la libertad de establecimiento del art. 49 TFUE cuando no se acredite su idoneidad para conseguir los objetivos de buen gestión del transporte, del tráfico, del espacio público y de protección del medio ambiente y no es proporcionada para alcanzar esos objetivos. En idéntico sentido SSTs- 17-04-2024 (Rc 4652/2021) ECLI:ES:TS:2024:2003; 02-04-2024 (Rc 4949/2022) ECLI:ES:TS:2024:1799; 06-03-2024 (Rc 4291/2021) ECLI:ES:TS:2024:1404

#### **6.5.2. - VTC. Espera de 30 minutos. Restricciones a las autorizaciones de vehículos con conductor. Libertad de empresa.**

La STS- 11-04-2024 (Rc 528/22) ECLI:ES:TS:2024:1400, trata de aclarar si el establecimiento en la normativa autonómica (para el caso de los servicios VTC) de una antelación mínima de, al menos, 30 minutos desde el momento en que se realiza la solicitud y cumplimentación del contrato del servicio hasta que se produce la prestación efectiva de dicho servicio, así como de una medida de restricción de geolocalización con carácter previo a su contratación, se halla justificado y resulta compatible con el derecho a la libertad de empresa ( artículo 38 de la Constitución Española), a la luz del artículo 5 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y de la STS n.º 921/2018, de 4 de junio; así como de la doctrina constitucional sentada, entre otras, en las SSTC 35/2016, de 6 de marzo, 111/2017, de 5 de octubre y 112/2021, de 13 de mayo. El Tribunal Supremo declara que la necesidad de contratar el servicio de VTC con antelación mínima de 30 minutos antes de su prestación y la prohibición de geolocalización de los vehículos previa a su contratación no son compatibles con el derecho a la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución ni supera el canon de necesidad, adecuación y proporcional.

#### **6.5.3. Investigación accidente ferroviario. Independencia, imparcialidad y objetividad de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.**

En la STS-18-12-2023 (Rc 5512/2022) ECLI:ES:TS:2023:5734, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Asociación, considerando que la adscripción de la CIAF al Ministerio de Fomento responde a la estructura organizativa de la Administración institucional española: todos los organismos con funciones de regulación y supervisión de determinados sectores de la economía o de la actividad pública y privada están adscritos a un Ministerio, sin que ello afecte a

su independencia funcional, la cual se asegura mediante los requisitos, procedimientos de nombramiento y cese y régimen jurídico de sus miembros y del propio organismo. Concluye que la CIAF, en su actual regulación y composición, cumple con las exigencias de independencia, imparcialidad y objetividad requeridas por la Directiva 2016/798.

#### **6.5.4 Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Enriquecimiento injusto.**

La STS 29-09-2023 (Rc 567/2021) ECLI:ES:TS:2023:4088 modifica el título concesional de transporte por la Administración, al amparo de la doctrina del enriquecimiento injusto, ante la posibilidad de reclamación por la empresa transportista del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. La Sala declara que la acción de resarcimiento o restitución, basada en el principio general del Derecho Administrativo que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa, no resulta directamente aplicable a aquellos supuestos en que la Administración concedente de un servicio público exige a la empresa concesionaria el reintegro de aquellas cuantías que fueron previamente satisfechas en concepto de compensación por el incremento de los costes de los carburantes, con base en las cláusulas del propio título concesional, como consecuencia de soportar el gravamen del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, cuyo establecimiento fue ulteriormente declarado incompatible con el Derecho de la Unión Europea en sentencia de 27 de febrero de 2014, invocado como fuente de la obligación de restituir la presunción consistente en la mera posibilidad de carácter aleatorio de que la concesionaria podría instar el procedimiento tributario de devolución de ingresos indebidos incoado frente a la Hacienda Pública, o ejercitar la acción indemnizatoria de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, si no se acredita el presupuesto de la existencia de aumento patrimonial o la transferencia o desplazamiento.

#### **6.5.6.- Adjudicación directa de contrato de servicio público en supuesto excepcional de interrupción del servicio o riesgo inminente de interrupción: imposición del requisito de previa renuncia del concesionario prestatario del servicio.**

La STS- 10-07-2023 (Rc 4523/20) ECLI:ES:TS:2023:3102, tiene por objeto determinar si en los supuestos excepcionales de interrupción de los servicios o de riesgo inminente de esta situación, cuando la decisión de emergencia a adoptar sea la adjudicación directa del contrato de servicio público, se puede imponer como requisito previo a la adjudicación directa la previa renuncia del concesionario prestatario del servicio o, si por el contrario, se puede proceder a la adjudicación directa sin la previa exigencia de la renuncia.

### **6.6. - DERECHO PUBLICO DE LA COMPETENCIA**

**6.6.1. –. Defensa de la competencia. Autoridad administrativa competente para la instrucción y resolución de procedimientos sancionadores: incidencia de la existencia de procedimientos masivos para verificar los efectos supraautonómicos de prácticas restrictivas.**

La STS- 24-04-2024 (Rc 1877/22) ECLI:ES:TS:2024:2216 afirma que las Comunidades Autónomas que tengan reconocida competencias en esta materia, tendrán competencia respecto de los procedimientos que se sigan por prácticas que cumplan los dos siguientes requisitos cumulativos: que se desarrollen en el ámbito territorial autonómico y que no afecten a un ámbito superior al autonómico. Por el contrario, la competencia será de la CNMC si las conductas afectan a un ámbito supraautonómico, aunque se desarrollen en el ámbito territorial autonómico.

**6.6.2.-. Potestad sancionadora en materia de defensa de consumidores y usuarios en sectores regulados. Competencia estatal y competencia autonómica.**

La STS- 8-04-204 (Rc 6689/21) ECLI:ES:TS:2024:1877, afirma que la potestad sancionadora en materia de defensa de consumidores y usuarios puede ejercerse también en los sectores regulados cuando la conducta desplegada infrinja esta normativa sectorial sin invadir por ello la competencia del Estado. Pero el ejercicio de la competencia autonómica en materia de consumo no puede cuestionar los precios de los aparatos de telemedida fijados por el Estado.

**6.6.3. Defensa de los consumidores. Telefonía móvil. Publicidad engañosa. Legitimación.**

La STS- 21-03-2024 (Rc 7923/21) ECLI:ES:TS:2024:1864, considera que en este tipo de productos no puede exigirse al consumidor un esfuerzo o comprobación a fin de advertir la verdadera oferta que se le realiza. Resulta contraria a la normativa de protección de los consumidores cualquier conducta que contenga información falsa o indicación que aun siendo veraz, por su contenido o presentación, induzca o pueda inducir a error a los destinatarios sobre las características principales del bien o del servicio ofertado, y no tener en cuenta que no cabe restringir la noción de consumidores o usuarios, a los efectos de aplicar el Derecho de Defensa de los Consumidores, al tipo de consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz, cuando se trate de productos o servicios vinculados a la sociedad de la información destinados a la generalidad del público de masas. La publicidad hacía referencia a llamadas ilimitadas, pero lo cierto es que había un límite de 150 llamadas mensuales, que se observaba en las condiciones de venta del producto, pero con una publicidad que lleva a engaño.

**6.6.4. Determinación de si la delimitación exacta del mercado relevante es o no un elemento del tipo de la infracción tipificada en los artículos 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.**

En la STS- 30-01-2024 (Rc 6135/22) ECLI:ES:TS:2024:420, según la Sala, la coincidencia de la zona o territorio donde las empresas prestan sus servicios no es un elemento objetivo autónomo del tipo de la infracción. No hay posibilidad de competencia ni de colusión si la prestación de servicios se realiza en mercados geográficos diferentes, por lo cual la coincidencia geográfica es un presupuesto de la existencia misma de competencia igual que la coincidencia del producto o servicio ofrecido por las empresas concurrentes. La calificación de la conducta del art. 1 LDC y del art. 101 TFUE y su autoría vienen determinadas principalmente por el contenido del acuerdo y la voluntad que persigue el mismo, que es lo que va a tener repercusión en el mercado. La definición del mercado geográfico es un elemento que ayuda a definir el ámbito en el que la conducta se lleva a cabo, pero no resulta determinante para la definición del tipo sancionador. Por otra parte, la definición del ámbito territorial del mercado es relevante a efectos sancionadores tanto para determinar la competencia del órgano sancionador como para cuantificar las sanciones.

**6.6.5. Efectos que la distinción entre mercado relevante y mercado afectado puede tener en la delimitación del elemento esencial del tipo de la infracción tipificada en el art. 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del TFUE.**

La STS- 24-01-2024 (Rc 5867/2022) ECLI:ES:TS:2024:342, de acuerdo con el criterio de la Sala la coincidencia de la zona o territorio donde las empresas prestan sus servicios no es un elemento objetivo autónomo del tipo de la infracción. No hay posibilidad de competencia ni de colusión si la prestación de servicios se realiza en mercados geográficos diferentes, por lo cual la coincidencia geográfica es un presupuesto de la existencia misma de competencia igual que la coincidencia del producto o servicio ofrecido por las empresas concurrentes. La definición del mercado geográfico es un elemento que ayuda a definir el ámbito en el que la conducta se lleva a cabo, pero no resulta determinante para la definición del tipo sancionador. Por otra parte, la definición del ámbito territorial del mercado es relevante a efectos sancionadores tanto para determinar la competencia del órgano sancionador (art. 13 de la LDC y Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia), como para cuantificar las sanciones (criterio del art. 64.1.a) LDC.

**6.6.6.- Cuota de entrada y fondo de regulación de ascensos y descensos de la liga ACB. Mercado relevante.**

En la STS- 26-06-2023 (Rc 1349/22) ECLI:ES:TS:2023:2882 se cuestionan las condiciones económico-administrativas relacionadas con la cuota de entrada y el fondo de regulación de ascensos y descensos en la liga ACB de Baloncesto por posible infracción del derecho a la libre competencia. Concluye la Sala que el mercado relevante, a los efectos de la imposición de la sanción, incluye la totalidad de las competiciones de baloncesto. Además de ello, la Sala argumenta que el acuerdo de la asociación de clubes de baloncesto, en lo relativo a las condiciones económicas impuestas y su aplicación desigual, comporta una clara desventaja para los aspirantes a ingresar y limita su capacidad de acceso a la competición por lo que se considera un acuerdo colusorio que impide y restringe la competencia al fijar condiciones desproporcionadas y discriminatorias contrarias al artículo 1 LDC.

## **7.- DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS**

### **7.1.- Motivación de las sentencias. Inactividad de la Administración. Interrupción del plazo de prescripción por acción emprendida por una entidad asociativa. Principio buena administración.**

La STS, 3ª, 3-10-23, RC 2257/2022, ECLI:ES:TS:2023:4099, da respuesta a la cuestión de interés casacional consistente en determinar si, en la reclamación del abono por la Administración de las cantidades correspondientes a los servicios prestados por los centros de educación infantil, en la determinación inicial del plazo prescriptivo, es preciso que resulte acreditada la fecha de la notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación o si por el contrario el dies a quo se sitúa en la fecha en la que concluyó el servicio o la prestación, o en otra fecha, y si la acción emprendida por una entidad interrumpe el plazo prescriptivo para el caso de considerarse que ostenta representación institucional de los sujetos colectivos concluyendo que por regla general, la acción emprendida por una entidad asociativa únicamente interrumpe el plazo prescriptivo respecto de sus asociados, cuyos exclusivos intereses profesionales y económicos representa.

### **7.2.- Derechos fundamentales. Denegación de medida cautelar. Pérdida de objeto al haber recaído sentencia en el pleito principal.**

La STS, 4ª, 18-10-23, RC 6303/2022, ECLI:ES:TS:2023:4271, concluye en el caso que el recurso de casación ha perdido su objeto ya que el sentido de las medidas cautelares es asegurar la efectividad de la sentencia que, en su día, resuelva el recurso contencioso-administrativo de manera que este no pierda su finalidad legítima.

### **7.3.- Autorización de entrada en domicilio familiar con menores de edad para el desalojo y aplicación del principio de proporcionalidad. Voto particular.**

La STS, 3ª, 31-10-23, RC 140/2021, ECLI:ES:TS:2023:4804, reitera la doctrina de interés casacional ya sentada en anteriores sentencias, que la resolución del juez de lo contencioso administrativo que autorice un desalojo de una vivienda ocupada ilegalmente en la que habiten menores u otras personas especialmente vulnerables, ha de valorar las circunstancias personales, económicas, sociales y familiares concurrentes y ponderar la proporcionalidad y suficiencia de las medidas adoptadas o previstas por la Administración para asegurar que no se produce una situación de abandono o desatención del menor o persona vulnerable afectada.

El voto particular considera ambigua la precisión de la sentencia (FJ 3): «Las medidas no tiene por qué ser una solución habitacional a los ocupantes ilegales de la vivienda. Lo que debe atenderse es a la situación resultante tras el desalojo para el menor o persona especialmente vulnerable: con la finalidad de que no pueda producirse una situación de abandono o exclusión social, como podría serlo el que el menor quedase sin ningún género de atención familiar o social, la cual debe quedar asegurada por la Administración antes de que se autorice el desalojo» pues considera imprescindible que, cuando tenga lugar un desalojo por ocupación ilegal de una vivienda, se garantice a los menores una mínima y necesaria alternativa habitacional que impida su exposición en la intemperie de la vía pública. Considera que la Sentencia, cuando hace referencia al límite del abandono o exclusión social, no garantiza con la necesaria determinación y precisión y en un sentido positivo, ese derecho mínimo vital habitacional de los menores.

### **7.4.- Derechos fundamentales contrapuestos: derecho de reunión versus derecho a la intimidad (art. 20 y 18 de la CE).**

La STS, 4ª, 18-04-24, RC 5164/2023, ECLI:ES:TS:2024:2012 considera que el ejercicio del derecho de reunión y manifestación puede verse limitado por otros derechos fundamentales y que la autoridad gubernativa debe ejercer las facultades que le confiere la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, de manera que concilie unos y otros cuando sea evidente el conflicto y el perjuicio que de otro modo se causará.

## **8.- EXPROPIACIÓN FORZOSA**

### **8.1.- Órgano municipal competente para iniciar acciones judiciales en materia de expropiación forzosa.**

La sentencia de 8 de noviembre de 2023 (rec. 4969/2022, ECLI:ES:TS:2023:4731) fija una interesante doctrina jurisprudencial en la



que, primeramente, se determina cuál es el órgano municipal -el pleno o el alcalde- que ostenta competencia en materia expropiatoria, pues ello determinará, en consecuencia, el competente para decidir el ejercicio de acciones judiciales en esa materia.

Así, la cuestión sobre la que se entiende existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar qué órgano municipal ostenta la competencia para el ejercicio de acciones judiciales en materia expropiatoria, en particular cuando se pretende impugnar un acuerdo de justiprecio del jurado de expropiación dictado en expediente de expropiación por ministerio de la ley. Consecuentemente, se identifican como normas jurídicas objeto de interpretación los artículos 21.1. j), k) y s) y 22.2.j) y q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 41.22 y 27 y 50.14, 17 y 25 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, artículo 85 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa y artículo 3.4 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa

Como respuesta a la cuestión casacional, la Sala afirma que, en virtud de la cláusula residual de atribución de competencia del art. 21.1.s) LBRL, en relación con el art. 21.1.k) LBRL, el alcalde tiene atribuciones para adoptar el acuerdo de decidir el ejercicio de acciones judiciales en materia expropiatoria y, en particular, cuando se pretende impugnar un acuerdo de justiprecio del jurado de expropiación dictado en expediente de expropiación por ministerio de la ley, para dar cumplimiento al requisito contemplado en el art. 45.2.d) LJ.

## **9.- EXTRANJERÍA Y ASILO**

### **9.1.- EXTRANJERÍA**

#### **9.1.1.- Situación de estancia irregular en España. Sanción de multa o expulsión. Juicio de ponderación y circunstancias de agravación. Doctrina jurisprudencial.**

Dos pronunciamientos de la Sala [sentencias de 18 de septiembre de 2023 (recs. 2251/2021 y 1537/2022 - ECLI:ES:TS:2023:3700- y - ECLI:ES:TS:2023:3701-)], a los que han seguido un nutrido grupo de sentencias, han venido a conformar la doctrina jurisprudencial en interpretación del art. 57.1 de la LOEX, en relación con los arts. 53.1.a) y 55.1.b) del mismo cuerpo legal. De este modo, la Sala sistematiza la abundante doctrina del TJUE, del TC y del propio TS y fija como doctrina jurisprudencial que la situación de estancia irregular determina, en su caso, la imposición de la sanción de multa o la sanción de expulsión, siendo preferente la primera cuando no concurren circunstancias que, con arreglo al principio de proporcionalidad, justifiquen la expulsión. Así, cuando la decisión consista en la imposición de una multa, la resolución administrativa que la imponga debe contener una orden de salida de cumplimiento voluntario que concrete el mandato contenido en el art. 28.3.c) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y en la Directiva 2008/115/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008. Los plazos que se establezcan para la salida efectiva del territorio nacional deben ser prudentemente limitados en el tiempo, dentro de los márgenes de los que dispone la Administración, a los efectos de no privar a la Directiva de su efecto útil. En su caso, la expulsión, comprensiva de la decisión de retorno y su ejecución, exigirá, en cada caso y de manera individualizada, la valoración y apreciación de circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada, tras la tramitación de un procedimiento con plenas garantías de los derechos de los afectados, conforme exige la jurisprudencia comunitaria. En este sentido, las circunstancias de agravación han de considerarse las que se han venido apreciando por la jurisprudencia en relación con la gravedad de la mera estancia irregular, bien sean de carácter subjetivo o de carácter objetivo, y que pueden comprender otras de análoga significación.

## **9.2. - ASILO**

### **9.2.1.- Asilo. Protección internacional y justicia cautelar. Incidencia de la sentencia del TJUE (Gran Sala) de 19 de junio de 2018 (asunto C-181/16, Caso Gnandi)**

La Sala, en un nutridísimo conjunto de pronunciamientos (véase, por todas, la STS 996/2024, de 6 de junio, rec. 1898/2023 - ECLI:ES:TS:2024:3022- matiza la doctrina jurisprudencial fijada por la precedente STS de 29 de noviembre de 2022 (rec. 1314/2022) y concluye que el órgano jurisdiccional debe adoptar, en sede cautelar, una decisión que asegure que el solicitante de asilo no se verá obligado a salir de España durante la pendencia del recurso jurisdiccional interpuesto contra la resolución denegatoria de su solicitud de protección internacional. Considera que la legislación española sobre tutela cautelar en materia de asilo puede, en los términos expuestos, ser interpretada de manera conforme con el Derecho de la Unión, pues contempla un régimen general de adopción de medidas cautelares que permite al órgano jurisdiccional conjugar el efecto automático suspensivo de la interposición del recurso jurisdiccional previsto como regla general en el art. 46.5 de la Directiva 2013/32, que obliga durante su pendencia al mantenimiento del estatuto del solicitante de asilo con todo lo que conlleva (permanencia en España y mantenimiento de las condiciones de acogida), con la contemplación circunstanciada de las excepciones previstas en el apartado 6 del artículo 46 de la citada Directiva.

## **10.- PODER JUDICIAL. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.**

### **10.1.- Legitimación para pretender en el proceso judicial la imposición de sanciones al juez o magistrado denunciado.**

La STS, 6ª, 04/06/2024, Nº de Recurso 399/2023, ECLI:ES:TS:2024:2958, señala que el denunciante que ha visto archivada su denuncia carece de legitimación para pretender en el proceso judicial la imposición de sanciones al juez o magistrado denunciado, ya que no le reportará ninguna ventaja ni le evitará ninguna desventaja, de manera que el interés que le asiste al denunciante es exclusivamente el de la defensa de su entendimiento de la legalidad. El desacuerdo con la forma en que llevó y resolvió el proceso penal la magistrada denunciada, son extremos que no cabe revisar en el procedimiento disciplinario, en el que en modo alguno cabe dejar sin efecto actuaciones judiciales, y que deben solventarse por medio de los recursos jurisdiccionales previstos en las leyes procesales.

### **10.2.- Medidas de refuerzo y apoyo. Legalidad de la comisión de servicio cuya renovación se instó por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia con la anuencia del comisionado, y podía ser renovada sin necesidad de ofrecerla en concurso público.**

Como dice la STS, 6ª, 08/04/2024, Nº de Recurso: 948/2022, ECLI:ES:TS:2024:1859, la Sala no ignora que en torno a la utilización que hace el Consejo General del Poder Judicial de las medidas de refuerzo y apoyo y, en particular, de las comisiones de servicio existe una extendida polémica en el seno de la Carrera Judicial. Tampoco ignora que son imprescindibles para atender las necesidades que no pueden cubrirse con la planta judicial existente y aquellas otras que surgen en el funcionamiento normal de una organización compleja de la naturaleza de la que forman los juzgados y tribunales desde los que se ejerce la potestad jurisdiccional. Ahora bien, no le corresponde a esta Sala entrar en ese debate sino resolver conforme a Derecho las pretensiones que, en torno a medidas concretas de refuerzo y apoyo y a singulares comisiones de servicio, se le someten por los jueces y magistrados a los que afectan. En el caso que nos ocupa, nos parece clara la legalidad de la actuación del Consejo General del Poder Judicial. La comisión de servicio cuya renovación se instó por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia con la anuencia del comisionado arranca del 8 de julio de 2021 y que, por tanto, según los artículos 216.4 y 350.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, podía ser renovada para el segundo semestre de 2022 sin necesidad de ofrecerla en concurso público. Es cuando menos sorprendente la forma en que se dejó sin efecto en la práctica el procedimiento de renovación y se pasó a anunciar la comisión de servicio tantas veces mencionada y también lo es que no se notificaran personalmente al afectado.

**10.3.-No procede reconocer indemnización por las comisiones de servicios que tengan lugar por iniciativa propia.**

La STS, 6ª, 07/03/2024, Nº de Recurso: 836/2022, ECLI:ES:TS:2024:1202 sostiene que el artículo 3.3 del Real Decreto 462/2002 establece con claridad la regla de que no darán lugar a indemnización las comisiones de servicio que tengan lugar a iniciativa propia y los demás preceptos de esta disposición general no permiten sustentar las pretensiones del recurrente porque no se da el presupuesto en el que descansan, ya que no fue obligado a solicitar la comisión de servicio, la pidió porque quiso y, aunque cubrir un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de los de Madrid, al igual que la provisión de cualquier destino judicial, es de interés público, cuando de las indemnizaciones por razón del servicio se trata, no es ese el extremo a considerar sino que se ha de tener presente, como dice el precepto, a quién corresponde la iniciativa.

**10.4.- La actividad como titulares de la potestad jurisdiccional de jueces y magistrados, se debe diferenciar de su condición de empleados públicos sujetos a un estatuto profesional, que sí está comprendido en la actividad inspectora y disciplinaria del CGPJ.**

Sostiene la STS, 6ª, 05/03/2024, Nº de Recurso: 9/2023, ECLI:ES:TS:2024:1270, que la premisa primera e insoslayable de la que partir, como tantas veces se ha dicho por este Tribunal, es que en la actuación de jueces y magistrados son de diferenciar dos aspectos: el de empleados públicos sujetos a un estatuto profesional (que sí está comprendido en la actividad inspectora y disciplinaria del CGPJ) y el de titulares de la potestad jurisdiccional (que es ajeno a esa actividad gubernativa y solo puede controlarse a través de los recursos establecidos en las leyes procesales y mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional).

**10.5.- Proceso selectivo para la provisión de plazas entre juristas de reconocida competencia. Si la recurrente entendía que algunos miembros del tribunal ejercieron una actividad de preparación que incurría en la incompatibilidad, debió recusarles nada más conocer tal circunstancia.**

La STS, 6ª, 11/10/2023 Nº de Recurso: 660/2022, ECLI:ES:TS:2023:4183, sostiene que si la recurrente entendía que algunos miembros del tribunal ejercieron una actividad de preparación que incurría en la incompatibilidad estipulada en el artículo 344 del Reglamento 2/2011, debió recusarles nada más

conocer tal circunstancia, y no solamente tras un resultado adverso en un ejercicio. Y no puede aceptarse la alegación de que hasta la fecha de la lectura del dictamen no se sabía quiénes serían los miembros que actuarían ese día, pues era conocedora de que podían ser los que ahora aduce que eran incompatibles. Eran miembros del tribunal y podían participar en cualquiera de las sesiones, por lo que debió recusarlos tempestivamente.

**10.6.- Los servicios especiales en la carrera judicial han de ser objeto de interpretación y aplicación estricta. No resulta admisible declarar a una persona en situación de servicios especiales en dos o más Cuerpos o Carreras simultáneamente.**

Según la STS 3540/2023, 6ª, 21/07/2023, Nº de Recurso: 290/2022, la situación de servicios especiales es, según reiterada doctrina constitucional y jurisprudencial, una situación de privilegio que, como tal, ha de ser objeto de interpretación y aplicación estricta. Por ello, la normativa reguladora de los servicios especiales prevista específicamente para la Carrera Judicial ha de ser interpretada y aplicada bajo esa perspectiva. Conviene precisar, además, que la situación de servicios especiales no deja de ser una suerte de ficción jurídica en virtud de la cual el legislador permite que la carrera profesional del interesado continúe "viva" y que, en definitiva, éste progrese en ella como si continuase en la situación de servicio activo, manteniendo los beneficios que le corresponderían de ordinario en tal situación (antigüedad, trienios, eventuales ascensos, etc.). Precisamente por ello, no resulta admisible, conceptualmente, aplicar esa ficción jurídica y declarar a una persona en situación de servicios especiales en dos o más Cuerpos o Carreras simultáneamente y, mucho menos aún, cuando esa situación pretenda referirse a dos o más cargos o puestos de trabajo incompatibles entre sí por disposición legal.

**10.7.-La falta de aptitud e idoneidad a que se refiere el artículo 201.5.d) de la LOPJ puede ser enjuiciada con independencia del desempeño anterior de su labor sin antecedente o nota desfavorable alguna.**

La STS, 6ª, 08/04/2024, Nº de Recurso: 803/2022, ECLI:ES:TS:2024:1909, reitera la jurisprudencia, según la cual, la falta de aptitud e idoneidad a que se refiere el artículo 201.5.d) de la LOPJ puede venir dada por la contemplación panorámica del desempeño profesional del juez sustituto a lo largo del tiempo, pero también por hechos concretos o puntuales que revistan suficiente transcendencia y gravedad como para fluir de ellos un déficit de aptitud e idoneidad que justifique su cese, esto es, la idoneidad puede ser enjuiciada con independencia del desempeño anterior de su labor sin antecedente o nota desfavorable alguna. Por otra parte la información sumaria que el citado artículo

exige para el cese de los Jueces sustitutos, cargos eminentemente temporales y de ejercicio eventual, no constituye un expediente disciplinario, ni el cese constituye una sanción.

**10.8.- - Cabe reconocer las retribuciones y alta en seguridad social de jueces sustitutos tras cesar en su nombramiento y llamamiento, pero solo si se trata de supuestos excepcionales.**

Mantiene la STS, 6ª, 22/03/2024, Nº de Recurso: 20/2023, ECLI:ES:TS:2024:1787, que el TS ha reconocido el derecho a las retribuciones y alta en seguridad social de jueces sustitutos tras cesar en su nombramiento y llamamiento, pero se trataba de supuestos excepcionales en los que debía reconocerse que continuaban prestando su actividad durante el tiempo necesario para dictar sentencias u otras resoluciones pendientes a su cese. Existen razones legales y objetivas que justifican suficientemente el distinto régimen legal aplicable a los magistrados de carrera y a los jueces sustitutos, sin que proceda cursar el alta en Seguridad Social por los periodos de nombramiento por el Consejo General del Poder Judicial del juez sustituto, sino que sólo tienen derecho al alta en Seguridad Social al tiempo en que ejerzan efectivamente la función judicial; sí procede se les reconozca la situación de IT hasta la terminación del proceso de IT, cuando la circunstancias que determinen dicha situación se produzcan al tiempo en que efectivamente ejerzan la actividad judicial; sin que proceda computar a efectos de cómputo de méritos, más llamamientos que en los que efectivamente se haya ejercido la función judicial como juez sustituto.

**10.9.- Llamamiento de los magistrados suplentes. Ni la LOPJ ni el reglamento establece pautas cerradas para la delimitación del sistema a establecer.**

La STS, 6ª, 05/03/2024, Nº de Recurso: 314/2023, ECLI:ES:TS:2024:1177, mantiene que ni la LOPJ ni el reglamento establece pautas cerradas para la delimitación del sistema a establecer para el llamamiento de los magistrados suplentes, partiendo de la imperatividad de las rotaciones, el art. 200 de la LOPJ habla en exclusividad de " serán llamados a formar Sala según la prelación que se establezca dentro de cada orden u órdenes jurisdiccionales para el que hubieren sido nombrados". Ha de convenirse que la autorización que otorga el art. 105 del Reglamento a las Salas de Gobierno es amplísima, indicando qué criterios se tendrán en cuenta, pero sin cerrar la posibilidad de que se incluyan otros, de suerte que será el conjunto de criterios previstos los que determinen el orden de preferencia en llamamiento e incluso determinados y concretos llamamientos.

**10.10.- Las denominaciones oficiales de la Comunidad Autónoma y de su capital son las establecidas en el Estatuto de Autonomía. Deben usarse tanto en las resoluciones judiciales cuanto en el soporte en el que constan recogidas, así como en las certificaciones que de ellas se expidan y su soporte.**

La STS, 6ª, 06/03/2024, Nº de Recurso: 734/2022, ECLI:ES:TS:2024:1178, resalta que las denominaciones oficiales de la Comunidad Autónoma y de su capital están claramente establecidas en el Estatuto de Autonomía. Y está claro que deben usarse tanto en las resoluciones judiciales cuanto en el soporte en el que constan recogidas, así como en las certificaciones que de ellas se expidan y su soporte. La Sala de Gobierno se limitó a aplicar la Ley Orgánica del Poder Judicial cuyo artículo 101.1 sigue diciendo que son los ayuntamientos los que eligen a los jueces de paz y la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tuvo en cuenta que, conforme al artículo 63.2 del Estatuto de Autonomía los regidores del Ayuntamiento de Formentera integran el Consell Insular, y acordó la rectificación. No apreció ilegalidad en el acuerdo de la Sala de Gobierno sino un error debido a la falta de concordancia entre la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto de Autonomía que corrigió. Tampoco hay ilegalidad, porque un membrete, la expresión en castellano Islas Baleares o hablar de Palma de Mallorca no la determinan, ni suponen menosprecio, ni discriminación lingüística. Expresan solamente un desajuste terminológico que ninguna relación guarda con el nombramiento del Juez de Paz de Formentera, que es de lo que se trataba. Es manifiesta, pues, la desproporción del planteamiento del recurrente.

**10.11.- Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales unipersonales y a los Presidentes de Sala o de Sección de los Tribunales colegiados, la potestad de fijar los criterios generales conforme a los que han de realizarse los señalamientos.**

La STS, 6ª, 16/10/2023, Nº de Recurso: 688/2022, ECLI:ES:TS:2023:4229, reafirma la doctrina consolidada, según la cual, en materia de señalamientos, el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en el proceso contencioso-administrativo, atribuye a los titulares de los órganos jurisdiccionales unipersonales y a los Presidentes de Sala o de Sección de los Tribunales colegiados, la potestad de fijar los criterios generales conforme a los que han de realizarse los señalamientos, hasta el punto de que el concreto señalamiento que no se ajuste a ellos debe ser rechazado por el Juez o Presidente, quien decidirá en definitiva. Y esta atribución excluye del todo la posibilidad de que el CGPJ fije la periodicidad de los señalamientos, lo que infringiría notoriamente el citado artículo 182 LEC, y, por derivación, el artículo

117.3 CE que reserva la actividad de "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado" (con el alcance dicho) a los Jueces y Magistrados que conforman el Poder Judicial del Estado. No quiere decirse con esto que la Inspección carezca de margen de actuación ante una eventual insuficiencia en la actividad jurisdiccional del órgano inspeccionado. Si así lo constata puede reflejarlo en el acta que se extienda, y puede hacer sugerencias sobre posibles vías para corregir las distorsiones apreciadas. Puede también disponer una actividad de seguimiento para verificar si el titular del órgano judicial enmienda la situación detectada de forma adecuada. Puede incluso promover por los cauces pertinentes la indagación de eventuales responsabilidades disciplinarias o de otro orden ante un incumplimiento o desatención punible. Lo que no puede es impartir órdenes al órgano judicial inspeccionado sobre cuántos señalamientos ha de hacer o con qué periodicidad, porque esa es cuestión que sólo atañe al titular del Juzgado.

#### **10.12.- Transparencia en el CGPJ y protección de datos personales. No es accesible a terceros los datos relativos a la salud de una magistrada**

Según la STS, 6ª, 31/10/2023, Nº de Recurso: 705/2022, ECLI:ES:TS:2023:4437, la solicitud de información se rechazó porque la documentación de la que se trataba contiene datos personales especialmente protegidos, como son los relativos a la salud de la magistrada a la que se refiere el recurrente. Protección que recibe tanto de la normativa en materia de protección de datos personales europea e interna, cuanto de la que regula la información y documentación clínica y la propia Ley 19/2013: artículo 15 e, incluso, podemos añadir de la Constitución pues el derecho a la intimidad personal que reconoce su artículo 18.1 se proyecta sobre la salud. Esa información, aunque conste en documentos elaborados en procedimientos incoados y resueltos por el Consejo General del Poder Judicial no es accesible a terceros, precisamente porque contiene datos relativos a la salud de la magistrada. Por eso, no sirve la solución de la anonimización ni de la disociación. No cabe separar de la persona a la que pertenecen cuando se trata de documentos obrantes en expedientes individualizados. Ni es posible anonimizar lo que consta identificado personalmente.

### **11.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL**

#### **11.1.- Responsabilidad patrimonial del Estado legislador al amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 182/2021, de 26 de octubre, en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Desestimación.**

Durante el periodo examinado, la Sala ha desestimado [véase, por todas, la STS 986/2024, de 4 de junio (rec. 533/2023) -ECLI:ES:TS:2024:2969-] un numeroso



grupo de recursos interpuestos frente al Acuerdo del Consejo de Ministros del Consejo de Ministros que desestimatorio de las solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador derivadas de la declaración de inconstitucionalidad de determinados preceptos del TRLHL que regulan el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La Sala parte de que la declaración de inconstitucionalidad de una norma no es una presunción de antijuricidad absoluta de los daños derivados de sus actos de aplicación, ya que puede ser desvirtuada en supuestos en los que no se acredite que la sujeción a tributación de una realidad patrimonial vulnera el principio de capacidad económica. La vulneración del principio de capacidad económica es *la ratio decidendi* tanto de la inconstitucionalidad declarada en la STC 59/2017, como de la declarada en la STC 182/2021, circunstancia que resulta relevante a la hora de determinar la existencia de la antijuricidad derivada de la declaración de inconstitucionalidad y de un daño efectivo y cuantificable económicamente, presupuestos imprescindibles para que la responsabilidad patrimonial pueda ser apreciada. Por lo tanto, no se puede afirmar que de la nulidad de los preceptos contrarios a la Constitución, declarada por el TC, emerja imperativamente un daño antijurídico que pueda ser cuantificado por equivalencia a la cantidad satisfecha, sino que será necesario en todo caso probar la minusvalía.

#### **11.2.- Responsabilidad patrimonial por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19**

En un numeroso conjunto de pronunciamientos análogos [véase, por todas, la sentencia de 20 de diciembre de 2023 (rec. 213/2022 - ECLI:ES:TS:2023:5682-], la Sala desestima los recursos interpuestos frente a la desestimación, por silencio administrativo, de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por los recurrentes por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.

### **12. – SANIDAD**

#### **12.1. Sanidad. Conservación de las células madre del cordón umbilical. Obligación de suscribir un convenio o acuerdo de colaboración entre el**

## **Servicio extremeño de salud y una entidad privada para conservar la sangre del cordón umbilical para su eventual uso.**

La STS - 5-2-2024 (Rc 4628/21) ECLI:ES:TS:2024:580 afirma que el artículo 7 del Real Decreto Ley 9/2014 prevé no solo la obtención de células y tejidos de un ser humano para su ulterior aplicación alogénica, sino también para su uso autólogo eventual (art. 7.2), por lo que se reconoce el derecho del paciente a que la sangre del cordón umbilical y de las células madre que contiene puedan conservarse en un banco para ser utilizadas por la misma persona ante una eventual enfermedad futura. Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio legítimo de sus competencias en materia sanitaria y respetando los servicios comunes establecidos por el sistema nacional, pueden optar porque el servicio público restrinja la conservación y almacenamiento de la sangre del cordón umbilical al uso alogénico. Pero, al mismo tiempo, debe hacer posible el derecho de las usuarias del servicio público de salud a decidir sobre el destino del cordón umbilical, permitiendo así la viabilidad de la legítima opción que la ley confiere a la paciente consistente en obtener y conservar las células madre existentes en la sangre del cordón umbilical para uso autólogo eventual.

## **12.2.- Seguridad Social. Anulación de alta en el RETA de un trabajador del sistema especial de empleados de hogar. TGSS: Revisión de oficio en supuestos de constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones.**

En la STS- 17-11-2023 (Rc 6173/20) ECLI:ES:TS:2023:4970 se estima el recurso de casación afirmando que, tras la nueva redacción del apartado 5 del artículo 16 LGSS, dada por el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, es claro que la TGSS no precisa promover la vía judicial, sino que puede revisar de oficio sus actos dictados en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, declarándolos indebidos por nulidad o anulabilidad, según proceda, por el procedimiento establecido en el RGISS que antes hemos citado. Estima, asimismo, que el nuevo apartado 5 del artículo 16 LGSS no hace sino confirmar y reforzar las facultades de revisión de oficio que los artículos 16.4 LGSS y 54 y siguientes RGISS reconocían a la Administración de la Seguridad Social en materia de actos de encuadramiento ante incumplimientos de las prescripciones legales aplicables, con cambio de criterio en este extremo respecto del mantenido en las sentencias de esta Sala -citadas- y en coincidencia con la postura mantenida por la Sala Especial de Conflictos de Competencia de este Tribunal Supremo en sus autos 7/2023 y 12/2023. De este modo anula la sentencia recurrida que basó su fallo estimatorio en la apreciación de que las resoluciones de la TGSS impugnadas habían incurrido en nulidad de pleno derecho por omisión del procedimiento, por considerar que la TGSS debió acudir al procedimiento regulado por el artículo 146 LRJS para la anulación del alta controvertida y no proceder directamente a su anulación por vía administrativa.

### **13.- SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS. ACCIÓN DE FOMENTO**

**13.1. Principios de objetividad y transparencia recogidos en el artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.**

En la STS- 19-04-2024 (Rc 1089/22) ECLI:ES:TS:2024:1990, la Sala estima que ciertamente concurrían razones de interés público, social y humanitario para mejorar la situación en la que se encontraban los trabajadores temporeros agrícolas que residen en asentamientos de infraviviendas de varios municipios de Huelva, pero lo que no se acredita son las razones que impedían la convocatoria de un procedimiento de concurrencia entre los Ayuntamientos afectados por este problema para la obtención de las ayudas disponibles.

La Administración optó por mantener comunicaciones con cuatro municipios solicitándoles presentasen sus propuestas, pero no convocó las ayudas ni fijó bases de valoración de las propuestas ni en definitiva canalizó la decisión en base a un procedimiento previo. Por el contrario, acudió a comunicaciones informales que concluyeron en la concesión directa de la ayuda a dos de los municipios implicados, dejando al margen a otros municipios directamente afectados por este problema.

Según la Sala esta forma de actuar es irregular y carece de justificación que ampare la utilización del cauce excepcional que implica la concesión directa de subvenciones.

**13.2. Reintegro. Incumplimiento con la actualidad de pagos y obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.**

La STS- 02-04-2024 (Rc 7456/2020) ECLI:ES:TS:2024:1913 afirma que el artículo 34.5 LGS exige para el pago de la subvención en todos los casos, bien se trate de un pago anticipado, un pago a cuenta o un pago posterior al cumplimiento de las condiciones, que el beneficiario se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Sin embargo, una vez producido el pago de la subvención, las causas que pueden fundamentar el reintegro de la subvención son las enumeradas en el artículo 37 de la LGS, entre las que no figura la de no hallarse el beneficiario al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. En casos del incumplimiento por el beneficiario de las obligaciones frente a la Seguridad Social inherentes a la creación y mantenimiento de los puestos de trabajo puede fundamentar una revocación de la ayuda, pero no en virtud del artículo 34.5 de la LGS, sino en la causa prevista en el art. 37.1.b) LGS.

### **13.3. Inembargabilidad parcial subvenciones. Expedientes de regulación temporal de empleo o trabajadores autónomos en situación de emergencia social.**

La STS- 13-12-2023 (Rc 8272/2022) ECLI:ES:TS:2023:5724, interpreta el artículo 23 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.1 b) y c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el sentido de que no se opone a que aquellas ayudas o subvenciones públicas, de las que resulten beneficiarios trabajadores por cuenta ajena sometidos a expedientes de regulación temporal de empleo o trabajadores autónomos, que tenga como finalidad subvenir a situaciones de emergencia social (como las contempladas en la Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de abril, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19), gocen de la prerrogativa de inembargabilidad parcial frente a deudas contraídas con la Tesorería General de la Seguridad Social, al resultar aplicable el límite establecido en el artículo 607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

### **13.4. Subvenciones en el área de acogida e integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, del estatuto de apátrida y de personas acogidas al régimen de protección temporal. Competencia.**

La STS- 29-11-2023 (Rc 1591/23) ECLI:ES:TS:2023:5722, señala el TS que la competencia exclusiva del Estado en materia de inmigración, extranjería y derecho de asilo incluye la actividad subvencional consistente en financiar proyectos a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan su actividad en el ámbito de la protección de solicitantes de asilo, reforzando con ello los mecanismos de primera acogida en España, manteniendo los dispositivos de las personas acogidas el régimen de protección internacional y financiando el equipamiento de los inmuebles destinados a todo ello. No cabe confundir esta competencia con la relativa la atención de las necesidades sociales de la población migrante, que se encuadra en el título competencial de la asistencia social (art. 148.1.20ª de la CE).

### **13.5. Subvenciones. Intereses de demora. Dies a quo.**

En la STS- 15-11-2023 (Rc 1927/2022) ECLI:ES:TS:2023:4721, la Sala fija como doctrina jurisprudencial que la exigencia del abono de intereses de demora en

favor del beneficiario de la subvención surge desde el momento en que se produce el reconocimiento legal de la obligación, salvo que se haya ejercitado previamente una acción frente a la inactividad de la Administración, al amparo de lo preceptuado en el artículo 29 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, y ésta no despliegue mediante actos de ejecución la obligación de subvencionar legalmente impuesta.

### **13.6. Concreción fecha inicio del cómputo de la prescripción. Interrupción del plazo de prescripción por acción emprendida por una entidad asociativa.**

La STS- 3-10-2023 (Rc 2357/22) ECLI:ES:TS:2023:4097 afirma que, por regla general, la acción emprendida por una entidad asociativa únicamente interrumpe el plazo prescriptivo respecto de sus asociados, cuyos exclusivos intereses profesionales y económicos representa.

### **13.7. Empresas que reciben fondos públicos. Situación ventajosa incompatible con el principio de libre concurrencia en contratación pública.**

La STS- 02-10-2023 (Rc 787/23) ECLI:ES:TS:2023:3972, determina la posibilidad de que las empresas que reciban fondos públicos participen en procesos de licitación para la adjudicación de contratos públicos en concurrencia con otras entidades privadas sin que ello lesione, en principio, la libre competencia. Solamente procede la exclusión de una entidad que recibe financiación pública si realiza una oferta anormalmente baja debido a la obtención de ayuda estatal o por recepción de subvenciones o ayudas no conformes a derecho.

## **14.- URBANISMO Y VIVIENDA, Y MEDIO AMBIENTE**

### **14.1. - URBANISMO**

#### **14.1.1.- Urbanismo. Evaluación ambiental estratégica y efectos de la nulidad de los instrumentos de planificación.**

En sendos pronunciamientos de singular relevancia -sentencias de 17 de enero de 2024 (rec. 2859/2022, ECLI:ES:TS:2024:168) y de 29 de febrero de 2024 (rec. 5185/2022, ECLI:ES:TS:2024:1180)- el TS resuelve los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Torremolinos frente a las sentencias del TSJ de Andalucía que determinaban la nulidad radical del PGOU de Torremolinos.

En el auto de admisión se declaró la existencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en reafirmar, reforzar, complementar y, en su caso, matizar la jurisprudencia sobre dos cuestiones o, más precisamente, sobre dos vertientes de una misma cuestión, de un lado, acerca del contenido y alcance de la evaluación ambiental estratégica en relación con los procedimientos de elaboración de los instrumentos de planeamiento y, de otro, sobre los efectos de la declaración de nulidad de un instrumento de tal naturaleza en aquellos supuestos en que la estricta aplicación de la doctrina consolidada de esta Sala sobre la nulidad de pleno derecho de los planes pudiera conducir a consecuencias de menor protección para el medio ambiente al recobrar vigencia la figura de planeamiento anterior.

A este respecto, se identifican como normas jurídicas que serán objeto de interpretación los artículos 191 y 192 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 18.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación con los artículos 3.1, 4.1 y 8 de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

La Sala, a la hora de responder a la primera de las cuestiones, relativa al alcance de la evaluación ambiental estratégica en el procedimiento de elaboración de los planes urbanísticos, recuerda que ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el debate que se suscita en la presente casación, en concreto, en las sentencias de 30 de octubre de 2018, rec. 3029/2017 y de 22 de julio de 2021, rec. 3920/2020, concluyendo que se debe *ubicar la iniciación de la EAE en la fase preliminar de borrador del instrumento de planeamiento, en los términos indicados en el art. 18 de la Ley 21/2013, sin que pueda deferirse tal iniciación a un momento posterior de la tramitación del plan, debiendo la perspectiva ambiental integrarse desde su inicio, desde esa fase preliminar, en las sucesivas fases de tramitación del plan.*

Respecto a la segunda de las cuestiones, de enorme trascendencia, por cuanto se vuelve a requerir al Tribunal la reconsideración de los efectos de la declaración de nulidad de un instrumento de planeamiento urbanístico, la Sala concluye (fijando doctrina jurisprudencial) que se debe *descartar que pueda entenderse no respetado el principio de no regresión por la sola circunstancia de la reviviscencia de un plan anterior como consecuencia de la declaración de nulidad de un plan de urbanismo por razones medioambientales, sin haberse realizado un análisis material comparativo desde la perspectiva ambiental de las respectivas previsiones de ambos instrumentos de ordenación.*

#### **14.1.2.- Urbanismo. Iniciativa particular en el planeamiento urbanístico y protección del patrimonio histórico.**

Por sentencia de 12 de marzo de 2024 (rec. 5723/2022, ECLI:ES:TS:2024:1414) la Sala Tercera del Tribunal resuelve un asunto en el que se plantea como cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia determinar si, conforme a lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico

Español, cabe promover por iniciativa de un particular la modificación puntual de un Plan Especial de protección de un área afectada por la declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica como Bienes de Interés Cultural. En su caso, determinar cuáles serían las consecuencias jurídicas si se estimara improcedente tal iniciativa particular en la formulación de estos instrumentos de planificación.

La interpretación que fija esta sentencia como respuesta a la mencionada cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, tras realizar una interesante reflexión sobre la protección del patrimonio histórico a través del planeamiento urbanístico y la posible iniciativa de los particulares, es que, en efecto, los particulares interesados tienen el derecho a promover una modificación puntual de un Plan Especial de protección de un área afectada por la declaración de Conjunto Histórico, sin perjuicio de que es a la Administración municipal a quien corresponde la aprobación inicial y definitiva de dicha modificación.

#### **14.1.3.- Urbanismo. Situación legal de fuera de ordenación y las situaciones asimiladas. Caducidad del ejercicio de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística**

En la sentencia de 17 de enero de 2024 (rec. 3642/2022, ECLI:ES:TS:2024:170) se plantea la conveniencia y necesidad de obtener un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo que refuerce, reafirme, matice o complete la doctrina jurisprudencial sobre la situación legal de fuera de ordenación y las situaciones asimiladas a esta, y en particular, determinar si “la realización de obras que exceden de la mera conservación, ornato, seguridad o salubridad sobre edificaciones en situación asimilada a fuera de ordenación, por haber caducado la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística, supone de modo inexorable la pérdida de la caducidad ganada

Son objeto de interpretación, fundamentalmente, el artículo 60.2 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, así como el artículo 1935 del Código Civil.

La sentencia, después de alcanzar una serie de interesantes conclusiones sobre el régimen jurídico de la situación asimilada a fuera de ordenación, ofrece una respuesta a la cuestión de interés casacional planteada en los mismos términos que la precedente sentencia de 10 de noviembre de 2022 (rec. 110/2022, ponente: Ángel Ramón Arozamena Laso), confirmando así la siguiente doctrina jurisprudencial: “La realización de obras que exceden de la mera conservación, ornato, seguridad o salubridad sobre edificaciones en situación asimilada a fuera de ordenación, por haber caducado la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística, no supone, de modo inexorable, la pérdida de la caducidad ganada”. Afirmación que se alcanza porque, aunque la “realización de obras no autorizables en edificios asimilados a la situación de fuera de ordenación supone un claro incumplimiento del régimen jurídico que se les otorga a estos y, evidentemente, la ilegalidad de las nuevas obras acometidas, que resultarán perseguibles mediante las potestades de disciplina urbanística de las que gozan las Administraciones competentes; pero de ello no se puede deducir, con carácter directo y automático, la renuncia a la prescripción de los derechos obtenidos por los propietarios de las mismas y, en consecuencia,

la pérdida de la caducidad ganada respecto a la posibilidad del ejercicio de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística”.

## **14.2.- MEDIO AMBIENTE**

### **14.2.1.- Parques eólicos. Procedimiento de evaluación de impacto ambiental Informes sectoriales y trámite de información pública.**

La sentencia de 21 de diciembre de 2023 (rec. 3303/2022, ECLI:ES:TS:2023:5708) resuelve un complejo y trascendente asunto en el que se plantea como cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la consiste en determinar si los informes sectoriales que se requieran para la tramitación de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental deben recabarse antes de someter el proyecto y el estudio de impacto ambiental al trámite de información pública.

En este sentido, se identifican como normas jurídicas que serán objeto de interpretación, el artículo 36.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y el artículo 6.3 de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

La interpretación que fija esta sentencia como respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es que *la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 2014/52/UE, y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, no imponen que, en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria de proyectos, antes de la información pública deba realizarse el trámite de consultas a las autoridades, sin que ello excluya que las particularidades que puedan concurrir reclame la puesta a disposición del público de alguna información que haya debido ser recabada previamente de las Administraciones afectadas por el proyecto, por demandarlo, en las circunstancias del caso, la efectividad de su participación; ello demandará el imprescindible esfuerzo argumental sobre la incidencia de la omisión de tal información en la efectividad del derecho a la participación del público en el procedimiento ambiental.*

### **14.2.2.- Ordenanza para la restricción de la circulación de determinados vehículos en la ciudad de Barcelona**

En hasta seis pronunciamientos (por todos, sentencia 1372/2023, de 2 de noviembre de 2023, rec. 4910/2022 -ECLI:ES:TS:2023:4853-), la Sección 5ª de Sala Tercera resuelve los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona y la Generalidad de Cataluña contra las sentencias del TSJ de Cataluña por las que se anulaba la Ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona relativa a la restricción de la circulación de determinados vehículos en la ciudad



de Barcelona con el objetivo de preservar y mejorar la calidad del aire, aprobada por el Pleno municipal el 20 de diciembre de 2019.

En el auto de admisión del recurso se precisa, como cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, la determinación de si:

*resulta posible preponderar, en pos del principio de proporcionalidad, los derechos a la movilidad de las personas y la libertad económica y de empresa respecto de los derechos a la salud y al medio ambiente a la hora de llevar a cabo el control jurisdiccional de la potestad reglamentaria en materia ambiental, teniendo en cuenta la naturaleza preventiva, permanente y proactiva de la intervención pública en la citada materia.*

Para ello, se identifican como preceptos que, en principio, serán objeto de interpretación: los artículos 2, 13.1 y 23.1 de la Directiva 2008/50/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa; 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el artículo 5.1 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en relación con el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de diciembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

La Sala concluye, tras una interesante argumentación, que lo *que la Sala sentenciadora quiere resaltar, como una de las últimas razones para el examen de legalidad de la Ordenanza y, en particular, para justificar que se haya rechazado acudir a otras alternativas, cuestión que se suscita a continuación del referido fundamento, es que las medidas impuestas no han podido ser debidamente valoradas a los efectos de ejercer las potestades discrecionales que ostenta la Administración por no haberse tomado en consideración esos aspectos económicos y sociales. Es decir, el debate se suscita, no en sede de procedimiento, sino en el ejercicio de la potestad reglamentaria y la obligada exigencia de la motivación en su ejercicio que, para no incurrir en arbitrariedad, debe aparecer suficientemente motivada, lo cual solo es posible mediante la obtención de todos los elementos determinantes afectados por dicha potestad, entre lo que no cabe despreciar a los que se refiere, en esta materia, la sentencia que se revisa, debiendo rechazarse el motivo examinado y, con él, la totalidad del recurso, sin que pueda darse respuesta a la cuestión casacional suscitada toda vez que, conforme a lo razonado, la decisión de la Sala de instancia no estaba motivada en la preponderancia de los derechos a la movilidad de las personas y la libertad de mercado respecto a los derechos a la salud y protección del medio ambiente".*

#### **14.2.3.- Dominio público marítimo-terrestre. Zona de influencia. Ordenación urbanística y régimen transitorio.**

En la relevante sentencia de 13 de febrero de 2024 (rec. 3290/2022, ECLI:ES:TS:2024:918), se resuelve un supuesto en el que se plantean al Tribunal dos cuestiones relativas al régimen jurídico de la zona de influencia prevista respecto del dominio público marítimo terrestre.

Así, a interesante controversia que se plantea ante el TS se centra, tal y como se afirmó en el Auto de admisión, en determinar: (i) Si debe someterse al informe previsto en el art. 117 de la Ley de Costas un instrumento de

planeamiento que lleva a cabo una ordenación que afecta exclusivamente a la zona de influencia que prevé dicha ley y, en caso afirmativo, si dicho informe tendrá carácter vinculante conforme a lo previsto en el art. 112.a) de la Ley de Costas.; y (ii) Si la ordenación urbanística de terrenos clasificados como suelo urbano con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas e incluidos en la zona de influencia de costas ha de respetar los criterios establecidos en el artículo 30 de la Ley de Costas."

Se interpretan, en consecuencia, los arts. 30 y 112.a), 117 y la disposición transitoria 3.ª.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y los arts. 59, 222, 227 y disposiciones transitorias octava, novena y décima del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.

Respecto de la primera de las cuestiones de interés casacional planteadas, la Sala determina que:

*Los planes de ordenación urbanística del litoral cuyo ámbito se localiza solamente en la zona de influencia, en la medida en que sus determinaciones tienen incidencia sobre el dominio público y sus zonas de servidumbre, están sujetos al informe preceptivo previsto en el art. 117 de la Ley de Costas, si bien su carácter vinculante se limitará a las consideraciones atinentes al dominio público y a las servidumbre de acceso y tránsito (o a las que puedan derivar de otras competencias sectoriales), no teniendo tal carácter vinculante las relativas a la servidumbre de protección o a la zona de influencia.*

Y, por lo que respecta a la segunda de las cuestiones que se plantean, la Sala considera que

*La disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley de Costas de 1988 debe interpretarse del siguiente modo: la ordenación urbanística de terrenos formalmente clasificados como suelo urbano con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas e incluidos en la zona de influencia sobre los que, a la fecha de su entrada en vigor, no se hubiera consolidado ningún aprovechamiento urbanístico por no haberse iniciado ni estar en curso a esa fecha ninguna actuación de transformación urbanística, ha de respetar los criterios establecidos en el art. 30 de la Ley de Costas.*

#### **14.2.4.- Dominio público marítimo-terrestre. Licencia urbanística y competencias autonómicas para reposición de legalidad**

Mediante su sentencia de 19 de enero de 2024 (rec. 3815/2022, ECLI:ES:TS:2024:407), el TS responde a la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consistente en determinar:

*si la Administración competente en materia de costas puede incoar un expediente sancionador o de reposición de la legalidad conculcada sin haber previamente impugnado, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, la licencia urbanística otorgada por una Administración Local que legítima una actuación edificatoria que se entiende incumple la legislación reguladora del dominio público marítimo-terrestre.*

En respuesta a la cuestión de interés casacional planteada, la Sala Tercera establece como doctrina jurisprudencial que , *conforme a los preceptos a que se hace referencia en el auto de admisión y los*

*presupuestos reseñados anteriormente, la Administración autonómica de Galicia no tiene competencias para ordenar el restablecimiento de la legalidad de protección del dominio marítimo terrestre y su zona de influencia ordenando directamente la demolición de una edificación amparada en una licencia urbanística municipal, conforme al planeamiento en vigor y ajustándose las obras a dicha licencia, debiendo acudir a la impugnación de la referida licencia en vía contencioso-administrativa y conforme a lo declarado en esa vía jurisdiccional.*

#### **14.2.5.- Dominio público hidráulico y aguas procedentes de la desalación. Impugnación del RD 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba, entre otros, el plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Segura.**

La Sala Tercera ha desestimado, en varios pronunciamientos [por todos, STS 542/2024, de 3 de abril (rec. 375/2023) -ECLI:ES:TS:2024:1858-], los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra los artículos 34, 36, 38 y conexos del Anexo X (dedicado a la revisión del plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Segura) del RD 35/2023, de 24 de enero. En estas sentencias se razona que las aguas procedentes de la desalación forman parte del dominio público hidráulico, por lo que deben someterse al régimen general de planificación y autorización previsto en la norma, régimen que no es otro que el de la concesión administrativa para adquirir los derechos de uso y aprovechamiento. Y sin que dicha concesión deba ser confundida con la procedente para la construcción y explotación de la desalinizadora. Por otro lado, el convenio regulador del suministro de agua desalinizada no sustituye a la concesión administrativa como título que autorice el uso y aprovechamiento de las aguas desaladas destinadas al riego agrícola, ni excluye la sujeción de esas aguas a la planificación hidrológica. Y es que las aguas desaladas no tienen un régimen jurídico distinto en cuanto al uso y aprovechamiento del resto de las aguas que integran el dominio público hidráulico y su sujeción al régimen concesional.

#### **14.2.6.- Modificación del Reglamento General de Costas. Nulidad de pleno derecho. Trámite de consulta pública.**

Mediante sentencia, de 31 de enero de 2024 (rec. 911/2022-ECLI:ES:TS:2024:481-) la Sala estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el RD 668/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General de Costas, declarando nula de pleno derecho dicha disposición. Analiza el vicio de procedimiento aducido referido a la ausencia del trámite de consulta previa recogido en los arts. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y 26 de la Ley del Gobierno. La vigente redacción de tales preceptos, en lo relativo a los supuestos de exención de dicho trámite, no es coincidente, suscitándose la cuestión de si esas circunstancias que justifican la exclusión son acumulativas o alternativas, cuestión que -estima- solo fue examinada de forma concluyente en la STS nº 1182/2022, de 22 de septiembre. Buscando una interpretación congruente de esos preceptos, sostiene que el artículo 133 se limita a recoger directrices a las que deben responder las políticas de los diferentes niveles de gobierno, mientras que el artículo 26 sí tiene por objeto

regular el "Procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos". Concluye que, para el supuesto de normas reglamentarias de la Administración General del Estado, las excepciones para poder prescindir del trámite de consulta pública, han de concurrir las circunstancias acumuladas de que se trate de normas presupuestarias u organizativas y, además de esas específicas normas reglamentarias, que concurren razones graves de interés público que lo justifiquen, no impongan obligaciones relevantes a los destinatarios o regulen aspectos esenciales de una materia

## **II.- TRIBUTARIO**

### **1.- PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS**

#### **1.1.- Procedimiento iniciado mediante declaración. Caducidad del procedimiento. Necesidad de declarar expresamente la caducidad antes de iniciar un nuevo procedimiento de inspección por el mismo concepto. Efectos.**

La **STS, 2ª, 21-09-2023, RC 8101/2021, ECLI:ES:TS:2023:3759** aclara que, aunque la caducidad acontece por el mero transcurso del plazo legalmente establecido, por tanto, con independencia de que exista una declaración de caducidad, la Administración Tributaria está obligada a declarar la caducidad de forma expresa, transcurrido el plazo máximo legal para notificar la correspondiente liquidación en el procedimiento de gestión tributaria iniciado por declaración. Sin declaración expresa de caducidad de un procedimiento de gestión tributaria iniciado mediante declaración, relativo a un determinado concepto tributario (obligación tributaria o elemento de la obligación tributaria) y período impositivo, no es posible iniciar un ulterior procedimiento de inspección respecto de dicho concepto tributario (obligación tributaria o elemento de la obligación tributaria) y período impositivo. Tampoco cabe incorporar en ese nuevo procedimiento los documentos y elementos de prueba obtenidos en el procedimiento caducado.

#### **1.2.- Procedimiento de comprobación de valores. Informe de valoración interno o externo. Determinación del *dies a quo* del plazo máximo del procedimiento.**

La **STS, 2ª, 01-03-2024, RC 7146/2022, ECLI:ES:TS:2024:1197**, señala que en los casos en los que la Administración tributaria solicita un informe de valoración a través de una de sus unidades, donde se encuadra el perito que emite el dictamen, desde ese momento debe considerarse que se realizan actuaciones para comprobar el valor de los bienes inmuebles y, en consecuencia, se ha iniciado el procedimiento de comprobación de valores, sin que pueda producirse un diferimiento del efecto iniciador, a efectos del cómputo del plazo de caducidad del procedimiento, a la fecha de otro acuerdo, este formal, de incoación y

propuesta de liquidación. En consecuencia, fija como doctrina jurisprudencial que desde que la Administración solicita un dictamen de peritos para verificar el valor del bien, la Administración ha iniciado un procedimiento de comprobación de valores, y en ese momento se deberá notificar la incoación al interesado.

La **STS, 2ª, 21-07-2023, RC 7594/2021, ECLI:ES:TS:2023:3518** analiza, por su parte, el caso en el que la comprobación de valores se solicita a otra Administración diferente de la liquidadora del impuesto y fija como doctrina que una actuación administrativa con trascendencia "ad extra" como es la solicitud de comprobación de valores cursada a otra Administración, excede del propio ámbito interno de la Administración actuante, y tiene el carácter de acto iniciador del procedimiento, en este caso de comprobación limitada.

### **1.3.- Procedimiento de inspección. Posibilidad de requerir la comparecencia personal del representante orgánico de la obligada tributaria que es persona jurídica. Efectos de incumplimiento**

La **STS, 2ª, 08-04-2024, RC 9079/2022, ECLI:ES:TS:2024:1887** indica que la facultad excepcional de la inspección de los tributos de requerir la comparecencia personal del obligado tributario, persona jurídica, se refiere a quien ostente su representación orgánica, pudiendo dar lugar su incomparecencia sin causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera señalado, a la infracción tipificada en el artículo 203.1 LGT, consistente en resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria.

### **1.4.- Recaudación. Limitación de los ayuntamientos para dictar diligencias de embargo de dinero en cuentas abiertas en sucursales de entidades financieras radicadas fuera de su término municipal**

La **STS, 2ª, 22-01-2024, RC 4911/2022, ECLI:ES:TS:2024:174** precisa que un ayuntamiento no puede practicar y dictar diligencia de embargo de dinero en cuentas abiertas en sucursales de entidades financieras radicadas fuera de su término municipal, incluso cuando dicho embargo no requiera la realización material de actuaciones fuera del citado territorio municipal por parte de dicha administración local, siendo necesario, en estos casos instar, conforme al artículo 8.3 del TRLHL, la práctica de dicha actuación a los órganos competentes de la correspondiente comunidad autónoma o a los órganos competentes del Estado, según corresponda.

### **1.5.- Responsabilidad tributaria solidaria. Prescripción de la acción para exigir la obligación de pago a los responsables. Cómputo y falta de virtualidad interruptiva del plazo de prescripción por actuaciones frente al deudor principal**

La **STS, 2ª, 18-07-2023, RC 999/2022, ECLI:ES:TS:2023:3309** aclara, en primer lugar, que el cómputo del plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios no puede ser interrumpido por actuaciones realizadas frente al deudor principal, salvo en aquellos casos en que la interrupción -de la facultad para exigir el pago- se dirija a quien previamente ha

sido declarado responsable pues, hasta que se adopte el acto formal de derivación, no cabe hablar en sentido propio de obligado tributario ni de responsable o responsabilidad (art. 68.7, en relación con el art. 68.1.a) y b) LGT; y estos, a su vez, dependientes del art. 66, a) y b) LGT). En segundo término, el art. 68.7, conectado con el apartado 1, a) y b) LGT, debe interpretarse en el sentido de que hay una correlación, a tenor del precepto, entre la facultad para declarar la derivación de responsabilidad solidaria y la de exigir el pago al ya declarado responsable -acciones distintas y sucesivas-, porque los hechos interruptivos, según la ley, son diferentes en uno y otro caso, de suerte que el carácter interruptivo de actuaciones recaudatorias solo es apto y eficaz para la exigencia del cobro al responsable de una deuda ya derivada.

Por su parte, la **STS, 2ª, 15-09-2023, RC 2851/2021, ECLI:ES:TS:2023:3679** fija como doctrina jurisprudencial que el cómputo del plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios debe situarse en el día siguiente a la finalización del plazo de pago en período voluntario del deudor principal. A los efectos de dicho cómputo, cuando la responsabilidad tributaria comporte la derivación de la liquidación y de la sanción, dicho plazo de pago en período voluntario es el que correspondía al deudor principal con relación a la liquidación. Las actuaciones recaudatorias, dirigidas frente al deudor principal o frente al obligado respecto de cuyas deudas se deriva la responsabilidad, pueden interrumpir el plazo de prescripción para exigir la obligación de pago únicamente frente a quien previamente ha sido declarado responsable pues, hasta que se adopte el acto formal de derivación, no cabe hablar en sentido propio de obligado tributario ni de responsable o responsabilidad.

#### **1.6.- Procedimiento sancionador. Operatividad de la prohibición del *bis in idem* en casos de anulación de sanción derivada de la previa anulación, por motivos formales, de la liquidación de la que trae causa.**

La **STS, 2ª, 15-01-2024, RC 2847/2022, ECLI:ES:TS:2024:223** determina que en los casos en los que se anule un primer acuerdo sancionador como consecuencia exclusiva de la anulación, por motivos formales, de la liquidación de la que traía causa la sanción, la dimensión procedimental del principio *non bis in idem* se opone al inicio de un nuevo procedimiento sancionador y a una nueva sanción con relación al mismo obligado tributario y por los mismos hechos.

## **2.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS**

### **2.1.- Presentación electrónica obligatoria de la autoliquidación del IRPF. Improcedencia por establecerse de forma indiscriminada**

La **STS, 2ª, 11-07-2023, RC 6391/2021, ECLI:ES:TS:2023:3295** se pronuncia sobre la obligación de presentación electrónica de la autoliquidación del IRPF. Declara no ajustada a Derecho la imposición a los obligados tributarios de relacionarse electrónicamente con la Administración, recogida en la Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, pues se establece de manera general para todos los obligados tributarios sin determinar los supuestos y condiciones que justifiquen, en atención a razones de capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, que se imponga tal obligación, que constituye una

excepción al derecho de los ciudadanos a ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos con las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento, reconocido en el art. 96.2 LGT.

## **2.2.- Deducción por maternidad. Aplicación del incremento. Interpretación de la expresión “guarderías o centros de educación infantil autorizados”**

La **STS, 2ª, 08-01-2024, RC 2779/2022, ECLI:ES:TS:2024:41** precisa que la expresión "guarderías o centros de educación infantil autorizados" contenida en el artículo 81.2, párrafo 1º, de la Ley del IRPF, que condiciona la aplicabilidad del incremento del importe de la deducción por maternidad, debe entenderse en el sentido de que la autorización exigida por el citado precepto a las guarderías o centros de educación infantil no es la otorgada por la Administración educativa correspondiente, que tanto solo será exigible a los centros de educación infantil, sino la que resulte precisa para la apertura y funcionamiento de la actividad de custodia de menores en guarderías, según las disposiciones normativas aplicables a este tipo de centros.

## **2.3.- Base imponible. Improcedencia del cómputo de pérdidas patrimoniales debidas a transmisiones lucrativas**

La **STS, 2ª, 12-04-2024, RC 8830/2022, ECLI:ES:TS:2024:2004** interpreta el artículo 33.5.c) de la Ley del IRPF en el sentido de que no procede computar, a efectos de este impuesto, las pérdidas patrimoniales declaradas debidas a transmisiones lucrativas por actos inter vivos o liberalidades, aunque en unidad de acto se computen las ganancias patrimoniales también declaradas, derivadas de ese mismo tipo de transmisiones.

## **2.4.- Derechos de imagen de deportistas profesionales. Tributación en el IRPF.**

La **STS, 2ª, 06-06-2024, RC 544/2023, ECLI:ES:TS:2024:3040** aborda la tributación de los derechos de imagen de un deportista profesional y clarifica que éstos constituyen, o pueden constituir, una fuente de ingresos al margen de la propia actividad deportiva desarrollada, por más que esta sirva como potenciadora de la importancia económica de este patrimonio inmaterial susceptible de ser comercializado. Precisa que los derechos de imagen de un deportista profesional, normalmente, suelen provenir de la naturaleza de la actividad deportiva, en función de la mayor o menor proyección y aceptación pública, pero no forman parte de dicho trabajo. No cabe encuadrar dichos derechos automáticamente en la actividad económica deportiva, sin más, como efecto derivado de la mera realización de la actividad deportiva y accesoria a esta, puesto que ello carece no sólo de base jurídica alguna, sino que con tal parecer se niega el sistema ideado por el legislador para establecer su tributación por IRPF. Por ello, debiendo estar a las circunstancias de cada caso, podrán encuadrarse los ingresos obtenidos por los deportistas profesionales autónomos en los supuestos de los arts. 25.4 ó 27.1, como rendimientos de capital mobiliario o procedente de actividad económica y debiéndose negar que en todo caso y en cualquier circunstancia los rendimientos obtenidos por deportistas profesionales

por la cesión de derechos de imagen deban ser calificados como rendimientos de actividades económicas en el IRPF.

### **3.- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES**

#### **3.1.- Exención de rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente. Imputación proporcional de gastos de dirección y generales de administración**

La **STS, 2ª, 17-07-2023, RC 4128/2021, ECLI:ES:TS:2023:3310** analiza la interpretación del artículo 22 del TRLIS en relación con la determinación de los gastos generales de administración que pueden imputarse a un establecimiento permanente situado en un país tercero. Y fija como doctrina que, para calcular el rendimiento obtenido por las actividades realizadas por una sociedad en un establecimiento permanente situado en el extranjero, que se encuentra exento ex artículo 22 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se podrán imputar proporcionalmente a dicho establecimiento los gastos de dirección y generales de administración realizados para alcanzar los fines del establecimiento permanente, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentra el establecimiento permanente como en otro lugar.

#### **3.2.- Imputación temporal de cantidades devueltas por ingresos indebidos derivados de un tributo declarado no conforme con el Derecho de la Unión Europea.**

La **STS, 2ª, 06-02-2024, RC 1739/2022, ECLI:ES:TS:2024:486** establece que la imputación temporal a efectos del Impuesto de Sociedades de las cantidades devueltas por la Administración tributaria, como consecuencia del ingreso indebido de un tributo efectuado por el contribuyente tras la declaración de no ser conforme al Derecho de la Unión Europea del citado tributo, deben imputarse temporalmente en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio en que se produjo el pago del tributo en cuestión.

#### **3.3.- Gastos deducibles. Retribuciones a los administradores sociales. Casos.**

Diversas sentencias han analizado la deducibilidad en el impuesto sobre sociedades de los gastos por retribuciones a administradores y consejeros en diversos supuestos. Entre ellas, podemos destacar las siguientes:

En primer lugar, la **STS, 2ª, 18-01-2024, RC 4378/2022, ECLI:ES:TS:2024:214** indica que las retribuciones percibidas por los administradores de una sociedad anónima, acreditadas y previstas en los estatutos de la sociedad, no constituyen una liberalidad no deducible por el hecho de que la relación que une a los perceptores de las remuneraciones con la empresa sea de carácter mercantil ni por la circunstancia de que las mismas no hubieran sido aprobadas por la Junta General de Accionistas.

La **STS, 2ª, 20-02-2024, RC 7435/2021, ECLI:ES:TS:2024:1012** afirma la deducibilidad en el impuesto sobre sociedades de las retribuciones satisfechas



a los administradores cuando tales retribuciones han sido aprobadas por la junta general, por estar previsto en sus estatutos sociales, no siendo óbice para ello que el acuerdo correspondiente no haya sido formalmente inscrito en el Registro Mercantil, puesto que la voluntad de la junta general se deduce de otros documentos obrantes en el expediente y concurren los requisitos de realidad o veracidad, inscripción contable y correlación con la actividad empresarial.

Por su parte, la **STS, 2ª, 13-03-2024, RC 9078/2022, ECLI:ES:TS:2024:1622** enfatiza que no cabe aplicar en el ámbito fiscal la teoría del vínculo, menos aún con la extensión que se pretende en el que ni siquiera se repara en las retribuciones que perciben los miembros del consejo de administración en su calidad de empleados por cuenta ajena; tampoco cabe calificar las retribuciones como donativo o liberalidad del artículo 14.1.e del TRLIS, sino que, en principio, son retribuciones, onerosas, que en cuanto han sido acreditadas y contabilizadas, deben considerarse gastos deducibles, sin que su no previsión estatutaria per se le haga perder esta condición, en tanto que por ese sólo hecho no se ha de considerar un acto contrario al ordenamiento jurídico, con el alcance que este tribunal Supremo, antes se ha transcrito pronunciamientos al respecto, le ha dado a dicha expresión.

La **STS, 2ª, 08-04-2024, RC 8081/2021, ECLI:ES:TS:2024:2016** se remite a la jurisprudencia fijada en la STS de 30-03-2021 (rec. 3454/2019) sobre la materia y, además, la complementa en el sentido de que los gastos de indemnización de un administrador que tienen su causa en un acuerdo para la salida negociada del directivo y el cese de su relación contractual con la entidad mercantil, y que no están previstos en los estatutos de la sociedad ni en ningún contrato que vincule al referido directivo con la entidad, carecen de causa obligacional correlacionada con la obtención de ingresos de la actividad y no son gastos fiscalmente deducibles a efectos de determinar la base imponible del Impuesto de Sociedades.

Por último, la **STS, 2ª, 30-04-2024, RC 7481/2022, ECLI:ES:TS:2024:2433** aclara que los gastos relativos a la retribución que perciban los socios que, al mismo tiempo son administradores o apoderados, como consecuencia de la efectiva prestación de servicios, distintos a los derivados de tal condición, en favor de la actividad empresarial de la sociedad, constituyen gastos fiscalmente deducibles a efectos del Impuesto sobre Sociedades, aunque no conste el acuerdo de la Junta General que contempla el artículo 220 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, siempre que exista inscripción contable del gasto, se imputen con arreglo a devengo y revistan justificación documental.

#### **4.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO**

##### **4.1.- Investigación básica. Derecho a la deducción de las cuotas del IVA soportadas por adquisiciones de bienes y servicios afectos a la actividad de investigación básica realizada por una Universidad**

La **STS, 2ª, 15-12-2023, RC 4384/2022, ECLI:ES:TS:2023:5700** analiza y confirma el derecho a la deducción de las cuotas del IVA soportadas por adquisiciones de bienes y servicios afectos a la actividad de investigación básica

realizada por una Universidad, aun cuando los proyectos de investigación básica de forma inmediata y directa no conlleven contraprestación. Esta sentencia supone un paso más respecto de doctrina fijada anteriormente, entre otras en la STS de 16-02-2016 (rec. 1615/2014), sobre la improcedencia de presumir la vinculación automática entre la actividad de investigación básica y la actividad de enseñanza que implique, de manera imperativa, la aplicación de la regla de la prorata.

#### **4.2.- Cesión gratuita de un vehículo afecto a la actividad empresarial a los empleados para uso particular. No sujeción.**

La **STS, 2ª, 29-01-2024, RC 5226/2022, ECLI:ES:TS:2024:538** indica que la cesión por el sujeto pasivo del uso de un vehículo afectado a la actividad empresarial a su empleado para su uso particular, a título gratuito, cuando dicho empleado no realiza ningún pago ni deja de percibir una parte de su retribución como contraprestación y el derecho de uso de ese vehículo no está vinculado a la renuncia de otras ventajas, no está sujeta al IVA, aunque por tal bien se hubiere deducido parte del IVA soportado por el renting del vehículo.

#### **4.3.- Subvenciones recibidas por sociedades que prestan servicios de radiodifusión pública. No inclusión en la base imponible**

La **STS, 2ª, 12-02-2024, RC 1887/2022, ECLI:ES:TS:2024:888** determina que las subvenciones recibidas por las sociedades que prestan servicios de radiodifusión pública no tienen naturaleza de contraprestación, no siendo por ello onerosa tal actividad y, por ende, no está sujeta al IVA, y los importes que reciben, en ese caso, de la Junta de Castilla-la Mancha a través del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha para su financiación, no forman parte de la base imponible del IVA.

### **5.- IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES**

#### **5.1.- Donación por ambos cónyuges de participaciones en empresa familiar. Requisito de la edad. Interpretación del art. 20.6 de la Ley del ISD**

La **STS, 2ª, 19-09-2023, RC 7855/2021, ECLI:ES:TS:2023:3674** señala que, en los casos de transmisión de participaciones "inter vivos", en favor del cónyuge, descendientes o adoptados, de una empresa individual, un negocio profesional o de participaciones en entidades del donante, el requisito de la edad contemplado en el artículo 20.6.a) de la ley de Sucesiones y Donaciones para la aplicación de la reducción en la base imponible para determinar la liquidable del 95 por 100 del valor de adquisición, debe exigirse a cada uno de los cónyuges, de forma separada, en tanto que cada cónyuge dona su parte sin consideración al otro.

#### **5.2.- Supuesto de transmisión del *ius delationis*. Cómputo del plazo de prescripción para liquidar el impuesto.**

La **STS, 2ª, 23-04-2024, RC 7570/2022, ECLI:ES:TS:2024:2437** fija como doctrina que el *dies a quo* del plazo de prescripción del derecho de la

Administración a liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en aquellos supuestos de adquisiciones por causa de muerte en los que el heredero fallece sin aceptar ni repudiar la herencia y el derecho se transmite a sus herederos, que son quienes aceptan y adquieren la condición de sujetos pasivos del impuesto, es el momento del fallecimiento del transmitente. La sentencia cuenta con voto particular de un magistrado.

## **6.- IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS**

### **6.1.- Formalización en un único documento notarial de la división en propiedad horizontal y extinción de condominio preexistente. Forma de tributar en AJD**

La **STS, 2ª, 18-10-2023, RC 3891/2021, ECLI:ES:TS:2023:4278** establece que, cuando en un mismo documento notarial se formaliza la división en régimen de propiedad horizontal y la extinción del condominio preexistente con adjudicación a los comuneros de su porción, a los efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad de actos jurídicos documentados, solo procede que se liquide por la extinción del condominio al constituir la división horizontal una operación antecedente e imprescindible de la división material de la cosa común.

## **7.- IMPUESTOS LOCALES**

### **7.1.- IIVTNU. Interpretación de la noción de “situaciones consolidadas” prevista en la STC 182/2021. La fecha relevante es la del dictado de la sentencia, no la de su publicación en el BOE**

La **STS, 2ª, 10-07-2023, RC 5181/2022, ECLI:ES:TS:2023:3294** indica que las liquidaciones provisionales o definitivas por IIVTNU que no hubieran sido impugnadas a la fecha de dictarse la STC 182/2021 (26-10-2021) no podrán ser impugnadas con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la misma, al igual que tampoco podrá solicitarse con ese fundamento la rectificación, ex art. 120.3 LGT, de autoliquidaciones respecto a las que aun no se hubiera formulado tal solicitud al tiempo de dictarse la STC 26-10-2021. Sin embargo, sí será posible impugnar dentro de los plazos establecidos para los distintos recursos administrativos, y el recurso contencioso-administrativo, tanto las liquidaciones provisionales o definitivas que no hubieren alcanzado firmeza al tiempo de dictarse la sentencia, como solicitar la rectificación de autoliquidaciones ex art. 120.3 LGT, dentro del plazo establecido para ello, con base en otros fundamentos distintos a la declaración de inconstitucionalidad efectuada por la STC 182/2021, de 26 de octubre. Así, entre otros, con fundamento en las previas sentencias del Tribunal Constitucional que declararon la inconstitucionalidad de las normas del IIVTNU en cuanto sometían a gravamen inexcusablemente situaciones inexpressivas de incremento de valor (entre otras STC 59/2017) o cuando la cuota tributaria alcanza confiscatorio (STS 126/2019) al igual que por cualquier otro motivo de impugnación, distinto de la declaración de inconstitucionalidad por STC 182/2021.

## **7.2.- IIVTNU. Posibilidad de revisar las liquidaciones firmes, al amparo del artículo 217.1.g) LGT, como consecuencia de la STC 59/2017. Revisión de la doctrina jurisprudencial previa**

La **STS, 2ª, 28-02-2024, RC 199/2023, ECLI:ES:TS:2024:941** revisa la doctrina establecida en la STS de 18-05-2020 (rec. 1665/2019) y otras, sobre la posibilidad de revisar liquidaciones firmes del IIVTNU como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de la STC 59/2017 al amparo del artículo 217.1.g) LGT. La nueva doctrina es la siguiente: la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 y 107.2.a) y 110.4 de la LHL, efectuada por la STC 59/2017, de 11 de mayo, traslada los efectos de nulidad de estas normas inconstitucionales a las liquidaciones tributarias firmes por Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que, con aplicación de dichas normas inconstitucionales, hubieran determinado una ficticia manifestación de capacidad económica, y sometido a gravamen transmisiones de inmuebles en las que no existió incremento del valor de los terrenos, con vulneración del principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad proclamados en el artículo 31.1 CE. Estas liquidaciones firmes pueden ser objeto de revisión de oficio a través del procedimiento previsto en el artículo 217 Ley General Tributaria, por resultar de aplicación el apartado g) del apartado 1, en relación con lo dispuesto en los artículos 161.1.a) y 164.1 CE y 39.1 y 40.1 LOTC, todo ello con los límites previstos en los artículos 164.1 CE y 40.1 LOTC, que impiden revisar los procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las normas declaradas inconstitucionales.

## **7.3.- IBI. Exención del artículo 62.1.a) TRLHL. Aplicabilidad al derecho de superficie respecto de inmuebles destinados a la educación**

La **STS, 2ª, 14-12-2023, RC 2587/2022, ECLI:ES:TS:2023:5695** precisa que, en el ámbito de un derecho real de superficie que, por definición, permite diferenciar la propiedad del terreno respecto de la propiedad "temporal" de la construcción (siendo esta última la que corresponde al superficiario), siempre y cuando se cumplan los restantes requisitos previstos en el artículo 62.1.a) TRLHL, procede aplicar la exención recogida en este precepto respecto de la parte del inmueble (suelo, vuelo o ambos) en la que se cumplan los citados requisitos. Enfatiza que no hay motivos para no extender la jurisprudencia existente a un supuesto como este, puesto que este requisito subjetivo abarca no solo al derecho de propiedad, en sí mismo, sino también en el derecho real de superficie, en algunos casos, concretamente, cuando el mismo no se concibe como un derecho a construir, sino como un derecho temporal sobre lo ya construido, que es lo que ocurre esta vez.

## **8.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTRAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS**

### **8.1.- Prestaciones sanitarias por COVID-19. Liquidación a aseguradora de precios públicos por gastos de asistencia sanitaria a beneficiarios de MUFACE por el servicio público de salud**

La **STS, 2ª, 17-10-2023, RC 5545/2022, ECLI:ES:TS:2023:4277** estudia si la asistencia sanitaria dispensada por el servicio público de salud a un paciente por COVID-19 que es beneficiario de la MUFACE consistía en una actuación en materia de salud pública o de vigilancia epidemiológica y, por tanto, quedaba excluida de las prestaciones sanitarias que la aseguradora venía obligada a prestar en virtud del concierto suscrito con MUFACE. La sentencia responde negativamente y fija como doctrina jurisprudencial que, por la asistencia sanitaria prestada por el Servicio Madrileño de Salud a un paciente afectado por la enfermedad denominada COVID-19 que es beneficiario de MUFACE, procede la liquidación de un precio público a fin de reclamar a la compañía aseguradora, que colabora por medio de concierto con la mencionada mutualidad, el gasto generado por la asistencia.

## **8.2.- Prestaciones patrimoniales públicas no tributarias. Obligatoriedad de la consulta previa en la elaboración de ordenanzas locales. Excepciones.**

La **STS, 2ª, 16-11-2023, RC 7629/2021, ECLI:ES:TS:2023:5029** indica que la consulta previa a la que se refiere el art 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es obligatoria respecto de las ordenanzas locales que, como las reguladoras de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, no afecten a materias de la Disposición Adicional primera LPACAP, salvo que pueda prescindirse de dicho trámite por causas legalmente previstas. A efectos de una ordenanza local, son causas legalmente previstas para prescindir del trámite de consulta previa, las contenidas en el primer párrafo del apartado cuarto del art 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas al tener carácter de legislación básica; y, en su caso, las que establezca la correspondiente legislación autonómica.

## **III.- CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO**

### **1.1. Determinación de la aplicación de la rehabilitación del plazo prevista en el art. 128 LJCA al trámite de audiencia concedido en una pieza de medidas cautelares. Indefensión.**

En la STS- 24-04-2024 (Rc 3820/21) ECLI:ES:TS:2024:2237 se concluye la procedencia de la aplicación de la rehabilitación del plazo prevista en el art. 128 LJCA al trámite de audiencia, ya se dicte en el procedimiento principal o una pieza de medidas cautelares. Inexistencia de indefensión en el asunto pese a la actuación del órgano judicial consistente en no haber dictado la resolución que tenía por caducado y precluido el trámite de alegaciones y así abrir la posibilidad de que la parte utilizase la posibilidad contemplada en el art. 128.1 de la LJ, pues, al margen de que la parte pudo presentar sus alegaciones y no lo hizo en el plazo

concedido al efecto, tampoco en el recurso de reposición planteado expuso las alegaciones por las que se oponía a la medida cautelar solicitada.

### **1.2. Acuerdo corporativo para recurrir adoptado por Administrador único de una sociedad de responsabilidad limitada. Inadmisibilidad apreciada en apelación. Trámite de subsanación.**

STS- 13-04-2024 (Rc 8369/2021) ECLI:ES:TS:2024:1623, estima el recurso de casación interpuesto y en respuesta a la cuestión de interés casacional planteada consistente en determinar si rechazada motivadamente por el órgano judicial de primera instancia la causa de inadmisión del recurso opuesta por el demandado, relativa a la falta de legitimación de una persona jurídica por la falta de acreditación del acuerdo de la misma que decida la interposición del recurso, puede el órgano judicial de segunda instancia apreciar la concurrencia de esa misma causa de inadmisión del recurso sin, en todo caso, requerir previamente a la parte demandante para que subsane el defecto procesal considerado. El Tribunal considera que si el recurrente en apelación se opone a la causa de inadmisibilidad planteada entendiendo que había presentado toda la documentación necesaria para acreditar la voluntad de recurrir de la persona jurídica en primera instancia, y el tribunal de apelación considera que la documentación aportada en la instancia era insuficiente, debe concederle la posibilidad de subsanar los defectos advertidos.

### **1.3.- Imposibilidad de introducir hechos nuevos en apelación por la vía del art. 33.2 de la LJ.**

La STS, 3ª, 10-10-23, RC 3395/2021, ECLI:ES:TS:2023:4330, determina que, con independencia de si el tribunal de apelación puede hacer uso o no de la opción contemplada en el art. 33.2 de la LJ, esta previsión legal tan solo permite introducir en el debate procesal motivos jurídicos no apreciados por las partes, pero no hechos nuevos con trascendencia jurídica.

### **1.4. No procede la extensión de efectos cuando está pendiente un recurso de casación sobre el mismo tema de fondo. El art. 110.6 de la LJCA debe interpretarse de conformidad con la actual regulación del recurso de casación.**

La STS, 4ª, 15-11-23, RC 3277/2020, ECLI:ES:TS:2023:4713 determina que cuando interesada la extensión de efectos de una sentencia firme, penda un recurso de casación contra otras sentencias idénticas, el artículo 110.6 de la LJCA contiene una previsión prudencial: debe suspenderse la resolución del incidente de extensión de efectos hasta que esta Sala se pronuncie pues se está ante una situación de incertidumbre en la interpretación de la norma en que se basa la sentencia objeto de extensión.

**1.5.- Extensión de efectos de sentencia, se hace preciso que la cuestión decidida no sea objeto de enjuiciamiento y posterior decisión por el Tribunal Supremo al conocer de un recurso de casación interpuesto contra otra sentencia con idéntica cuestión.**

La STS, 4ª, 11-01-24, RC1733/2021, ECLI:ES:TS:2024:125 fija criterio respecto del alcance del artículo 110 de la Ley jurisdiccional 29/1998 en supuestos donde la extensión de efectos puede verse afectada por la pendencia de recursos de casación interpuestos frente a la situación jurídica declarada y que integraba el objeto de la solicitud de extensión de efectos.

**1.6.- Falta de jurisdicción de la contencioso-administrativa para enjuiciar sobre reclamación de cuotas de Comunidad de Regantes. Competencia de la jurisdicción civil.**

La STS, 3ª, 20-4-24, RC 7203/2022, ECLI:ES:TS:2024:1882, determina la falta de competencia jurisdiccional del orden contencioso-administrativo para conocer de la impugnación de los Acuerdos adoptados por las Comunidades de Regantes, por los que se reclama el pago de la cuota de incorporación a los nuevos miembros, por entender que se trata de la reclamación de deudas que no están vinculadas al buen orden del aprovechamiento del agua, y que se incardinan, más bien, dentro del ámbito privado de la gestión patrimonial de la Comunidad de Regantes, sometido al Derecho común

**1.7.- En materia de incidentes de ejecución de sentencias, no podrá resolverse directamente sobre la forma correcta de ejecución sin plantear un incidente contradictorio del artículo 105.2 LJCA ante las manifestaciones sobre una supuesta imposibilidad material de ejecución realizadas por la Administración.**

La STS, 4ª, 25-04-24, RC582/2022, ECLI:ES:TS:2024:2449, concluye que en el ámbito de un incidente de ejecución de sentencia promovido por la parte, denunciando que los actos de ejecución se apartan del contenido de la sentencia, no podrá resolverse directamente sobre la forma correcta de ejecución sin plantear un incidente contradictorio del artículo 105.2 de la Ley de la Jurisdicción ante las manifestaciones sobre una supuesta imposibilidad material de ejecución realizadas por la Administración.

-O-O-O-O-O-